

## LA FRUSTRACION DE FELIPE II: EL FRACASO DE LA REFORMA DEL CONSEJO REAL DE CASTILLA DE 1598

Luis María García-Badell Arias  
(Universidad Complutense de Madrid)

### I.

La historia del Consejo Real de Castilla durante el reinado de Felipe II estuvo marcada por las Ordenanzas de 1554 y 1598. Las primeras tuvieron su origen en la visita que el Emperador ordenó hacer a los tribunales de la Corte en 1553. En el caso del Consejo, ésta fue realizada personalmente por el príncipe Felipe con el auxilio, como secretario de don Diego de Córdoba. Años después, el sobrino de éste informaba que

*«se comenzó en Madrid siendo Príncipe el Rey nuestro señor y estando governando estos Reynos. Comenzóse el año de cinquenta y dos o cinquenta y tres, prosigióse en Valladolid, de donde Su Magestad se partió para casarse a Ynglaterra, y mi tío fue dándole cuenta de la visita y de otros negocios hasta Toro, donde cayó malo y por esta causa bolvió a Valladolid»<sup>(1)</sup>.*

Juan de la Vega, testigo directo de la visita, daba cuenta del empeño que el príncipe Felipe puso en la empresa y de las reacciones que provocó en la Corte. Según decía en una carta

*«Su Alteza ha tomado por empresa de visitar los Consejos por su misma persona, examinándose delante de sí los testigos, y ha tomado por secretario a don Antonio de Córdoba, que fue Visitador deste Reyno».*

Y termina con una noticia del máximo interés

*«Andan los doctores dados al diablo, que no saben do tienen pies ni cabeça, y entre los caballeros anda gran regocijo»<sup>(2)</sup>.*

El testimonio confirma el ambiente de enfrentamiento que vivía la Corte castellana con ocasión de la visita<sup>(3)</sup>. Bajo la disputa entre el llamado *partido imperial* y el *partido ebolista*, todo parece indicar que subyacía un debate de mayor profundidad entre dos concepciones distintas sobre el gobierno por Consejo, que unos entendían como el medio para el ejercicio de la *iurisdictio* y otros como el instrumento idóneo para la

potestad regia. En cierta medida, el litigio que enfrentaba a *dotores* y a *caballeros*, no era sino la actualización de la disputa entre las *armas* y las *letras*, que ya conoció el Consejo desde su reordenación en las Cortes de Toledo de 1480<sup>4</sup>. Mediado el siglo XVI, el influjo renacentista desplazó la tensión del debate de la cualidad de la función militar v. justicia hacia el problema de la experiencia práctica<sup>5</sup>.

Desplazamiento que parece confirmado por un memorial, probablemente compuesto con esta ocasión por algún ebolista, donde se hace un especial hincapié en el descuido del Consejo de Castilla en las materias de gobierno, por el monopolio que tenían en él los juristas. Según decía el memorialista, por este predominio

*«los estrangeros se rrien mofan mucho del decuydo que pasa en estos rreynos en lo de la governación y de lo mal que se probeen algunas cosas que tocan a ella. Y todos tienen por averiguado, que la culpa dello está en ser rregidos por letrados. Y desto ay muy gran murmuración»*

La incompetencia de los consejeros radicaba en su condición de juristas y falta de experiencia fuera de las letras.

*«Los del Consejo, por lo que han estudiado y lugar que tienen, pretenden que pueden saber y entender todo lo que es menester para proveer las cosas de la buena governación. Y en saliendo de lo de su facultad, que consiste en letras, como lo demás no lo han estudiado y algunos no tienen espiencia dello, pasan trabajo en determinarse».*

La condición de juristas de los consejeros y el mismo carácter de tribunal del Consejo -consolidado desde los comienzos del siglo-, daba a sus decisiones el carácter de sentencias, lo que no hacía sino agravar los males. Considerando cualquiera de sus determinaciones como un fallo judicial, una vez promulgadas y publicadas,

*«aunque se aya herrado, lo mandan esecutar, sin querello hemendar por la autoridad del Consejo, con el consiguiente perjuicio para el Reino y las rentas reales».*

Para solventar todos estos males, la primera propuesta que hacía el memorial, era

*«que las cosas de governación se acertarian mejor a proveer por personas sin letras, que fuesen desocupadas de otros negocios y de buen natural e san yntención y tubiesen plática y esperiencia de hazienda e mercaderías».*

De esta manera sus decisiones deberían formarse, fuera de todo procedimiento judicial, con conocimiento

*«de lo que se haze en otros rreynos e señorios e entendiesen las cosas particulares y que pasan en los pueblos y en el rreyno y que las confiriesen y paticasen entre sí muchas vezes y hiziesen las averiguaciones neçarias y tomasen parecer de las personas que combiniere, que fuesen de la facultad de lo que oviesen de proveer».*

La segunda propuesta era que, dada la multitud de negocios de justicia, de residencias y de visitas,

*«sería bien acrecentar otras dos salas en el Consejo, que fuesen por todos dieciocho, para que mejor y con más brevedad se despachen los negocios».*

Además, el memorialista creía conveniente que

*«el rey debía entrar en el Consejo algunas vezes a vellos botar en cosas arduas y en otras cosas, porque con esto entendería sus letras y habilidades»<sup>6</sup>.*

La postura del memorial coincidía, en gran medida, con las peticiones que en repetidas ocasiones habían hecho las Cortes sobre el descuido del gobierno y la necesidad de acrecentar el tribunal, como ha señalado Salustiano de Dios<sup>(7)</sup>.

Pese a la sugerencia del memorial y a las pretensiones del Reino, en las Ordenanzas de 1554 no fueron más allá de una mera reparación de las deficiencias encontradas en el funcionamiento del Consejo, sin romper con la línea de continuidad desde su reorganización en las Cortes de Toledo de 1480, sin crear mayor turbación entre los consejeros<sup>(8)</sup>. Con la perspectiva de una larga estancia fuera de Castilla, el príncipe Felipe no podía ir más allá, en una materia tan cara a los consejeros como el establecimiento de salas separadas para lo judicial y lo gubernativo. Recordemos que hacía escasamente treinta y cinco años, que los comuneros habían intentado formar un Consejo con sendas salas de Justicia y de «Estado», matiz en el que hicieron especial énfasis los consejeros en la sentencia a muerte de los responsables<sup>(9)</sup>.

Mayor interés encierran las Ordenanzas promulgadas por Felipe II en 1598, pese a no llegaron a tener ni el año de vigencia, porque anticiparon las líneas maestras de la organización y estructura del Consejo de Castilla desde 1608 hasta su extinción en 1834<sup>(10)</sup>. El propósito declarado por Felipe II, según rezaba la Real Cédula, era «declarar cuántos y cuáles [consejeros] ha de tratar lo de gobierno y cuáles de la justicia», para agilizar el despacho de los negocios. Con este fin, el rey dispuso que el Consejo quedara dividido en cuatro salas con un número fijo de magistrados en cada una, cinco en la de Gobierno y en la llamada de las *Mill y Quinientas* y tres en las otras dos de justicia<sup>(11)</sup>; al mismo tiempo, el decreto enumeraba las atribuciones de las respectivas salas, con especial atención a la primera de ellas. La principal novedad de las nuevas Ordenanzas, sin embargo, no residía ni en la aparición de las salas ni en la diferencia que hacen entre los asuntos de gobierno y los de justicia: Lo verdaderamente novedoso era el la intervención del monarca en la vida interna del Consejo y la doble intención que ocultaba, cercenar la preeminencia adquirida por la figura del presidente a lo largo del siglo y someter a su control más fácilmente las decisiones del Consejo en materia gubernativa.

La existencia de diversas salas en el Consejo estaba ya consagrada en las propias Ordenanzas de 1554, cuyo capítulo 28 (NR, 2.4.36) disponía que el tribunal en pleno viera y determinara las visitas, «repartiendo por salas lo que no fuere para todos los del Consejo». Así mismo, la creación de la sala de las *Mill y Quinientas* tuvo lugar en 1560 a petición del las Cortes, para que resolviera los recursos extraordinarios conocidos con ese nombre o de la segunda suplicación y las residencias, había sido refrendada por Felipe II en 1593<sup>(12)</sup>. El reparto de los Consejeros en estancias separadas para el despacho de los distintos negocios, formaba parte de su funcionamiento cotidiano<sup>(13)</sup>; todos los días no feriados el tribunal se juntaba en pleno a primera hora de la mañana, momento en el que los secretarios daban cuenta de los memoriales presentados por las partes, los nuevos y los aún no decididos, y las cosas de gobierno de importancia, tras lo cual los consejeros se apartaban en las distintas estancias para tratar y decidir los negocios de expediente y los pleitos<sup>(14)</sup>. Esta era la función principal del oficio del presidente, al menos durante el tiempo que lo fue el conde de Barajas, o al menos así lo afirmaba él mismo,

*«que el tiempo que está en el Consejo le ocupa en repartir las salas y, con particular cuidado, de saber lo que se haze en ellas»<sup>(15)</sup>.*

La división de los negocios entre las salas, por tanto, no era una novedad. Como tampoco lo era la distinción entre los negocios judiciales y gubernativos, los que en la Ordenanza de 1598 se atribuyen a la sala de gobierno, que correspondían, en principio, al Consejo en pleno, fundamentalmente las materias de los expedientes y las visitas<sup>(16)</sup>.

Sobre este doble juego de la separación de las salas y el distribución de los asuntos, surgió el protagonismo del Presidente, que desbordaba con mucho el marco del tribunal y le convertía en una pieza política de primer orden, pues su decisión de atribuir determinados negocios a unos o a otros ministros, podía marcar decisivamente la resolución que se tomara por el Consejo. En cuanto a los asuntos gubernativos, el giro según parece, se produjo durante la presidencia del cardenal Espinosa (1565-1572), que comenzó a distinguir entre negocios de gobierno más o menos graves. Conforme a lo que se recordaba de su presidencia años después, tras de la lectura de los memoriales de las partes, el cardenal ordenaba que los de escasa importancia se resolvieran «juntándose en el hueco de las ventanas, dos consejeros con un secretario»<sup>(17)</sup>. La intervención del presidente para determinar quiénes habían de ver estos asuntos, en principio reservados para todo el Consejo, llegó al punto de traspasar lo dispuesto en las propias ordenanzas de 1554. Así ocurrió con las *visitas*, cuya resolución correspondía a los consejeros en pleno, comenzaron a verse por un número limitado de ministros escogidos por el presidente<sup>(18)</sup>. Respecto a los asuntos de justicia, la facultad para la distribución de los pleitos era aún mayor; la elección de los jueces que debían ver y determinar los procesos era una de las facultades propias de la presidencia, reconocida por el propio monarca<sup>(19)</sup>. Potestad que tácitamente se reconocía al presidente incluso para el recurso de la segunda suplicación -el más extraordinario de todos y reservado a la persona de rey-<sup>(20)</sup> y que la presión de las Cortes para que hubiera jueces fijos para ello, no pudo limitar<sup>(21)</sup>. Las consecuencias de un funcionamiento semejante, basado en la atribución de todo lo gubernativo al Consejo pleno y en la facultad del presidente para distribuir a su arbitrio los negocios entre los ministros, fue la lentitud y la arbitrariedad, tanto en la resolución de los negocios entre partes, como de los asuntos generales. Respecto a los primeros, la queja era que «toda regla del despacho es la voluntad, o memoria de quien los ha de ver y esto haze en el Consejo intolerable el officio de presidente»<sup>(22)</sup>. Achaque que podía ampliarse también a los asuntos de gobierno.

Felipe II quiso poner freno a la preponderancia que había adquirido el presidente y al descontrol en el despacho de los negocios, fundamentalmente en las materias de gobierno, que eran las dos caras de la misma moneda. Con este fin, el rey intentó en 1598, de una parte, disminuir las facultades de la presidencia y, por otra, crear una sala de Gobierno que suplantara al Consejo pleno y que funcionara como un consejo aparte dentro del mismo tribunal. En cuanto a la figura del presidente, su margen de manobra quedaba sensiblemente reducido, desde el momento que las Ordenanzas enumeraban las atribuciones de las dos salas principales, la de Gobierno y la llamada de *Mil y Quinientas*, y disponían que la designación de los consejeros para cada una de ellas, los realizaría el propio rey «al principio de cada año, consultándomelo el presidente». Así mismo, ordenaba que el presidente, entrase «los más días que pudiere» en la Sala de Gobierno con voto, dándole

*«como es costumbre, después de aver votado los demás, sin dar antes ningún indicio ni significación de su intento y parecer; para que más libremente puedan los otros de a misma sala declarar los suyos».*

Por último establecía que los nombramientos para las comisiones, se habrían de hacer entre veinte letrados elegidos anteriormente. Para los nombramientos de estas personas, decían la Ordenanzas, que,

*«después de avérmelas consultado el presidente, se les despacharán sus cédulas firmadas por mí»,*

señalando también el salario que les correspondía y otras condiciones para el ejercicio de los encargos que recibieran.

El alcance de las reformas respecto a la propia sala de gobierno, era aún mayor. Las Ordenanzas de 1598 dejaban a las claras el intento de Felipe II de consagrar su independencia respecto al resto del Consejo. Según establecía el rey, sólo correspondía a los ministros que entraran en ella el decidir las materias gubernativas, debiendo ordenar

*«los despachos que acordaren y consultas que dello me ayan de azer, que si las huviere de palabra, se dará al consultante y si no, se me enviarán por escrito, sin que ayan de dar parecer en ello los demás del Consejo».*

La independencia de la sala también quedaba reflejada en la tramitación cotidiana de sus negocios, pues debía tener un semanero particular -es decir un consejero que, por turno semanal, vigilara la corrección de los despachos de los escribanos-<sup>(23)</sup>, distinto del propio del Consejo, que, dicen las Ordenanzas

*«ha de ser uno de estas tres salas [de justicia], sin meter en esto al semanero que también ha de aver en la Sala de Gobierno».*

Pero la novedad no era solo la independencia, las Ordenanzas también dejaban entrever la preeminencia de esta sala frente al pleno del tribunal. En primer lugar, porque al tratar de la consulta de viernes, acto en el que se ritualizaba la cercanía del Rey a su Consejo, Felipe II disponía que, aquel día que todos los consejeros se juntaban

*«a ver los negocios que están remitidos a consulta, lo continuará como hasta aquí, con que no se vuelva a votar lo que estuviere ya».*

Es decir, dado que las consultas debían ser preparadas por los ministros del gobierno, al resto de los consejeros sólo les quedaba el tener la noticia de lo que se elevaba a la consideración del rey. Un segundo punto reflejaba mejor aún la preeminencia de la sala gubernativa sobre las demás y, también, sobre el Consejo pleno, puesto que las Ordenanzas le atribuían con exclusividad la resolución de

*«todas las competencias y diferencias que tuvieren qualesquier tribunales destos Reynos, que residen en Corte o fuera della, entre sí o con las justicias ordinarias, en que yo no tenga dada orden o la diere adelante sobre ello, consultándome primero lo que tocara a los tribunales».*

De esta manera, las salas de mil y quinientas y las futuras de justicia y de provincia quedaban sometidas a la decisión que tomara la de gobierno sobre la amplitud y extensión de su jurisdicción en los conflictos competenciales con el resto de los tribunales, atribución propia e íntima de la misma majestad soberana.

La génesis de las Ordenanzas de 1598 nos muestra que el propósito de Felipe II era

más la disminución del relieve alcanzado por la presidencia y el establecimiento de un mayor control sobre el Consejo en las materias de gobierno, creando para ello una sala casi totalmente desgajada de él. La resistencia que encontró el proyecto real, hizo que el tono de la reforma quedara empalidecido, en medida tan grande que años después la reposición de la misma Ordenanza por Felipe III abrió paso a la época de mayor poder del Consejo de Castilla.

## II.

Las intenciones que movieron a Felipe II a intentar una profunda reforma del Consejo de Real, sólo pueden ser comprendidas si tenemos en cuenta el papel medular que los Reyes Católicos dieron a esta institución en la reconstrucción del poder real en Castilla y su desarrollo posterior a lo largo del siglo XVI, capaz de yugular una evolución de la monarquía española más acorde con las transformaciones del tiempo<sup>(24)</sup>. En mi opinión, la historia del Consejo Real desde comienzos de la centuria estuvo caracterizada por cuatro notas principales. La primera de ellas fue su consolidación como tribunal de justicia, el más supremo dentro de la Corona castellana a partir de que en 1502, cuando se le atribuyó definitivamente la vista y determinación de los recursos de la segunda suplicación o de *Mill y Quinientas*, y con capacidad para avocar las causas y procesos que considerara oportuno<sup>(25)</sup>. La segunda característica estuvo en su propensión a acaparar todo tipo de materias gubernativas; el propio Emperador, con sus largas estancias fuera de la Península, favoreció esta inclinación por la sugerencia de sus principales colaboradores castellanos<sup>(26)</sup>. La tercera, y más importante, característica fue la tendencia a considerar el gobierno como una manifestación más de la *iurisdictio*, sometiendo la toma de decisiones en todos los negocios a los procedimientos y criterios propios de la administración de justicia. El propio Carlos V llamó la atención sobre los riesgos que suponía esta mistificación, cuando advierte que el Presidente Valdés, «mejor era para una Chancillería que para el Consejo»<sup>(27)</sup>. Finalmente, la última nota residió en el ascenso de la figura de la presidencia, algo a lo que el propio Felipe II contribuyó, sobre todo durante el mandato del cardenal Espinosa, y de lo que luego se arrepintió y trató de corregir con la reforma de 1598<sup>(28)</sup>.

A partir de los primeros años de 1570 el monarca dio ya muestras de hasta donde llegaba su preocupación por la actitud del Consejo Real de atribuirse competencias, que no eran propias de su instituto, y por tendencia de los consejeros a tratar todo lo del gobierno como si fuera administración de justicia. Así lo advirtió a Covarrubias cuando le nombró para la Presidencia en 1572<sup>(29)</sup> y lo remachó en instrucciones dadas al Presidente Pazos algunos años después, pues, decía «aunque es la principal ocupación del Consexo lo que toca al gobierno, suele ser de menos en que las personas dél se ocupan, y así tendréis mucha quenta con ellos, para que no se faltando a lo demás, se cumpla en lo que lo que digo, que se deve como es mucho menester mano propia. Y esto importa mucho que sea lo principal de todo lo que allí se trate»<sup>(30)</sup>. Todo indica que mediada la década de los setenta, Felipe II comenzó a pergeñar seriamente su intención de reformar del Consejo<sup>(31)</sup>. Así parece indicarlo el acopio de documentación sobre el tribunal realizada durante estos años, como fueron el intento de recuperar los papeles de la *visita* de 1554 o la recopilación de los escritos de tiempo del cardenal Espinosa y otros documentos antiguos<sup>(32)</sup>.

La entrada en la presidencia del conde de Barajas, a finales del mes de octubre de 1582, abrió nuevas expectativas a la reforma del Consejo Real, dentro de un vasto plan que abarcaba a otros tribunales de la Corte<sup>(33)</sup>. Un primer paso en esta dirección fue la Ordenanza de la Cámara de 6 de enero de 1588<sup>(34)</sup>. Pocos meses después, tenemos noticias de que el monarca trataba de la *reforma* del Consejo, al menos en lo que a plazas y salarios tocaba<sup>(35)</sup>. No obstante, el propio rey sabía que sin la aprobación de los consejeros castellanos, cualquier intento estaba llamado al fracaso; como decía el conde de Chinchón,

*«en lo que toca a la reformation del Consejo, aceptar lo que el Consejo ofresce, mas lo demás jamás lo ejecutarán»<sup>(36)</sup>.*

Y es que el Consejo había alcanzado una autoridad casi intratable; un incidente, tal vez pequeño a los ojos del lector, sucedido en 1586, dejó a las claras la impotencia del rey frente al tribunal<sup>(37)</sup>.

Ocurrió con motivo de la demanda que interpuso don Pedro Arias en el Consejo sobre la posesión del condado de Puñoenrostro. Vista la causa los consejeros dieron cédula, firmada por el rey, remitiendo el proceso a la Chancillería de Valladolid, «con aditamento que no pronuncie sentencia sin consultar primero al Consejo», razón por la que ésta rehusó su cumplimiento «pareciéndole que se le quita la auctoridad del Tribunal supremo que siempre ha tenido y tiene». El pleito quedó paralizado de inmediato, por lo que el demandante acudió ante el rey para que se le hiciera justicia. Felipe II, «considerando la competencia entre los dos tribunales... fue servido de comunicallo con el Consejo de Cámara, asistiendo el presidente del Consejo y fray Diego de Chaves». Visto el asunto por éstos, «de oficio, sin citar a las partes ni hazer pleito, sino sólamente las diligencias necesarias para conocer la verdad», la junta falló en igual sentido que el Consejo, salvo que la Chancillería debía consulta al rey. Expedida la correspondiente cédula,

*«teniendo noticia della el Consejo, ha acordado que se deve dar par provisión para que se exhiba y vea en el dicho Consejo si es justa o no la dicha provisión...»<sup>(38)</sup>.*

Enviado a un letrado del círculo del rey, su informe evaluaba hasta donde había llegado el desafío del Consejo:

1. *«Que como Rey y señor supremo y ley biva, puede y deve muchas vezes attender a sola la verdad y averiguándola por medio de personas de sciencia y consciencia, proceder conforme a ella».*
2. *«Que no es menor de edad para poder alegar [el Consejo] que fue engañado y tiene (Dios le guarde) la prudencia y entendimiento que todo el mundo sabe, para proceder por el término y justificación devido a cada negocio, y en esto pueden aprender de SM. todos quantos reyes ha avido, ay y habrá».*
2. *«Que si se revocasse la última cédula, se perdería reputación y daría a entender que SM. y los de la Junta (que se lo aconsejaron) procedieron inconsideradamente».*
3. *«Y con esto tomaría el Consejo alas par desautorizar y no tener en tanto, de aquí adelante, las resoluciones de SM., que aunque sean en materia de justicia, las deven de estimar y tener por ley. Y en esto va más de lo que se puede encarecer».*

Ninguna de las cuatro soluciones propuestas hechas a renglón seguido para atajar tal riesgo, atacaba la raíz del problema. La primera consistía en aplacar a las partes para que no continuaran el pleito; la segunda era simplemente en dejar correr el tiempo hasta que la Chancillería estuviera en condiciones de consultar la sentencia, que entonces se vería que habría que hacer. La tercera era un poco más comprometida, según el autor del papel

*«sería bueno, fuera de la vía ordinaria (y con mucho secreto), que se pusiessen en el Consejo Real las dos cédulas... consultassen a SM. qual de las dos paresciesse justa. Y siéndolo la última dada, lo pronunciasen assí en público con aucto, limitándoles tiempo y aún horas, dentro de las quales lo huiessen de hazer...».*

La cuarta, y última, comienza con fuerza, afirmando

*«que SM. como supremo señor de todo y ley biva, procure atajar la competencia de jurisdicción entre estos tribunales».*

A pesar de tan contundente afirmación, de inmediato, el poder absoluto del soberano se diluía por la exigencia del procedimiento, pues el rey habría de decidir

*«juntando para ello la cardenal de Toledo, Presidente del Consejo, Vicecanciller, Presidente de Indias y Presidente de Hacienda y fray Diego de Chávez, los quales todos vean las razones, que así por parte del Consejo Real, como por la del de Cámara, dieren cada uno en favor de su cédula y oydos por los sobredichos y consultado por SM. lo que les paresciere, pueda mejor determinar lo que fuere justo y conveniente, con declaración expresa que no pueda traerse en consquencia este exemplo para ningún caso»<sup>(30)</sup>.*

En esas condiciones, no era de extrañar que Felipe II también pensara que, en cuanto a la reforma, «aceptar lo que el Consejo ofresce».

Pero por más autoridad que tuviera, el Consejo precisaba una profunda reforma. Un testimonio vivo de esta necesidad, lo daba la queja de un letrado por la arbitrariedad que reinaba en su funcionamiento; las partes nunca podían saber cuándo se tratarían sus negocios, por la falta de una regla fija ni de respeto a la antigüedad de los asuntos. Todo dependía de la voluntad de presidente, por lo que todos los negociantes, continuaba el memorialista.

*«procuran hablarle a las tardes y darle el memorial a las mañanas. Y para esto madrugan todos los días un año y dos años, y esto les haze buscar valedores y comprarles el favor sin que el presidente lo sepa. Y como son tantas las quejas y clamores que la gente levanta por el poco despacho, se comienza a ver un pleito y, al mejor tiempo, se dexa y se comienza otro para cumplir con todos y quedan ambos en peor estado que si no se començaran, porque es necessario sperar que los mis-mos juezes buelvan a juntarse».*

Tal incertidumbre de saber cuándo se habían de ver sus asunto, forzaba a que los negociantes, continuaba diciendo el memorial,

*«todos los días cursen el patio y estén con mucho trabajo, porfiando de llegar cada uno más cerca de la puerta del Consejo sperando que le llamen».*

La conclusión era que muchos abandonaban sus pleitos y negocios antes de que concluyesen, con la consiguiente pérdida de tiempo y de fortuna. Tres soluciones proponía el memorialista, la primera, que se despacharan los asuntos por su antigüedad «ponien-



do una lista dellos a la puerta del Consejo como se han de yr viendo», guardando así las leyes de la Recopilación; la segunda, que una vez que se dividían en salas por la mañana, no volviera a juntarse el Consejo en pleno a lo largo del día; y, finalmente, que uno de los secretarios llevara relación de lo que se despacha cada día y se diese cuenta de ello todas las semanas al rey <sup>(40)</sup>. La respuesta del conde de Barajas a la quejas y a las insinuaciones de reforma, basculaba sobre la propia idiosincrasia del Consejo, que consideraba distinta por completo al resto de los tribunales del reino. Según el presidente,

*«en las Chancillerías, donde ay pleitos de tabla y salas señaladas, que no se mudan, no ay negocios de governación, que impidan la vista y execución de ellos, como en el Consejo, donde no se puede esto precisamente hazer, ni los presidentes passados, han podido salir con ello, porque, como se sabe, es muy diferente el gobierno y estilo del de los otros tribunales. Y suelen succeder cosas tan precisas y graves, que hazen torcer el curso ordinario, y SM. manda que se vean algunos papeles y negocios que an de anteponer a los demás»<sup>(41)</sup>*

Con estos presupuestos, una reorganización del tribunal basada en la división en salas que supusiera la distinción de negocios de justicia y de gobierno, no tenía sabida. A lo más que llegaba el Consejo, era a pedir que se reforzara su autoridad; con la excusa de reducir el número de las causas judiciales y aligerar el despacho, su propuesta era que no hubiese recurso de revista en las apelaciones de las sentencias pronunciadas por los jueces de comisión nombrados por el mismo Consejo<sup>(42)</sup>.

La desconfianza de Felipe II y sus secretarios hacia los consejeros de Castilla y los sucesivos presidentes, debió ir aumentando<sup>(43)</sup>. En 1591, Mateo Vázquez manifestó sin tapujos su recelo hacia el encumbramiento de la presidencia del Consejo. Para contrarrestarla propuso al rey que

*«con lo que sentía la gente tanto tiempo de Presidente en una misma persona, y acordándome que los virreyes son trienales, se me ofreció esta manera que podría ser conveniente serlo también para el Presidente del Consejo Real...»<sup>(44)</sup>*

La disputas entre las letras y la experiencia o entre administración de justicia y gobierno, habían pasado a un segundo plano. Ahora lo que más preocupaba al rey era la prepotencia alcanzada por el Consejo Real y, fundamentalmente, por la figura de su presidente. Así lo dejó claro el propio Felipe II, cuando, escasamente un año después del advertimiento de Mateo Vázquez, trató de volver las cosas a su ser, nombrando para la presidencia de don Rodrigo Vázquez de Arce<sup>(45)</sup>. Las instrucciones que el rey le entregó para ejercer el oficio no dan lugar a la duda de cuáles eran las intenciones del monarca:

*«antes de dezir las cossas que se me ofrezcan, os diré que, aunque yo pensé que acertaba en encomendar muchas más cosas al Cardenal [Espinosa] de las que tocaban a este oficio, y quizá hubo entonces causas para ello, pero la experiencia ha mostrado que esto no conviene. Y aunque era más descargo y menos trabajo mío, no me parece que se puede llevar adelante, ni que se puede con tan gran carga. Y así me ha parecido encomendaros sólo lo que toca al oficio de Presidente, aunque algunas cossas podrá aver extraordinarias y de poca ocupación, en que, conviniendo, os podréys ocupar alguna vez. Y quando se ofrezcan y sean tales, yo os las advertiré o encomendaré. Y esto he querido dezir primero, porque podría ser*

*que hubiese personas que, con otros fines, os dixesen lo contrario, pero esto es lo que nos conviene a vos y a mí y a nuestras conciencias y al bien de los negocios...».*

Después de lo cual, las instrucciones volvían a recordar el tópico de que «el oficio del Consejo es tener cuidado de lo que toca al gobierno del Reyno y que lo de los pleitos es accesorio»<sup>(46)</sup>.

Conocemos por el propio Arce cuáles eran los recortes que Felipe II pretendía hacer en las facultades de la presidencia. Según su propio relato, el 22 de abril de 1592, antes de ser nombrado presidente, fray Diego de Chaves y don Cristóbal de Moura le hicieron saber las condiciones en las que debería ejercer tan alto oficio:

1. *«Que se escogerán los 12 letrados o los que más pareciere para las residencias y comisiones de los Consejos Real y de Órdenes y demás tribunales de la Corte y éstos se a de Consultar a VM. de la misma manera que las demás plaças de justicia».*
2. *«Que se señalará sala para lo del Gobierno que aberigüe y [ilegible] muy bien lo que fuere menester en estas materias, mirando los que sean más a propósito para ello y para las resoluciones grandes se juntará todo el Consejo».*
3. *«Que se dividirán las demás salas como están en las Chancillerías y que el Presidente no nombrara los jueces y que precisamente se guardara la tabla para la vista y determinación de los pleitos, siéndolos por el antigüedad y tubieren en él ella».*
4. *«En el nombramiento de los consexeros de Indias se podrá pedir a parte nombramiento al presidente de aquel Consejo y quando SM. viniere de elegir a con-sejero que está en las Indias, lo abisará al Presidente dellas, que quando de otras partes, al de Castilla».*

Vázquez de Arce, después de agradecer la gracia que el rey le hacía por haber pensado en él para la Presidencia, rechazó el nombramiento. Consideraba que «este oficio avía quebrado mucho de su autoridad en la persona antecedente», el conde de Barajas, y que sólo recibiría el encargo si «no se tratase de las dichas condiciones» y, además, que

*«si SM. tenía asentado que los oficios se avían de nombrar por la Cámara y como solía antes de la nueva forma, que en esto se dio, que tampoco me atrevería a servirle, porque juzgaba por gran daño a la república que el que avía de ser en ella cavega de la justicia, quedase sin la autoridad que solía».*

En cuanto a lo primero, Chaves aseguró que las limitaciones que el rey había hecho saber «no se executaban agora», ni se consideraba que «era onbre que avía de servir a SM. de manera que fuese necesario» hacer estas advertencias. Pero, por lo que miraba a los nombramientos por la Cámara, «respondió don Cristóbal que en esto último no abía que hablar, por ser cosa asentada, ni yría con tal rrecado a SM.»<sup>(47)</sup>. Con estas promesas don Rodrigo Vázquez de Arce aceptó la Presidencia el 22 de abril, al mismo tiempo que el rey ordenaba que se expidiera su título<sup>(48)</sup>.

Felipe II, sin embargo, no olvidó su deseo de reformar el Consejo Real, con la intención, ante todo de cercenar el poder que el Presidente había adquirido a lo largo del siglo. Hacia final de 1593, debió lanzar otra ofensiva en ese sentido, por lo que Vázquez de Arce pidió licencia para retirarse de la Corte, logrando paralizar el proyecto. Al

año siguiente el rey volvió de nuevo a la carga, tal vez espoleado por la presión de las Cortes; pero tampoco en esta ocasión tuvo mejor éxito<sup>499</sup>. Ante tanta resistencia, el monarca hubo de esperar hasta quince meses antes de su muerte para llevar adelante sus proyectos sobre el Consejo de Castilla<sup>500</sup>. Para ello serían traídas a colación las advenencias dadas a mediados de 1591 sobre la reforma del tribunal castellano, aprovechando la ocasión del nombramiento de tres nuevos consejeros. Para ello Felipe II había pedido su parecer a don Hernando de la Vega, que presidía por entonces el de Indias. Éste respondió en una representación el 6 de julio, que conforme a lo que había conocido por los presidentes Hernando de Valdés, Juan de Figueroa y el cardenal Espinosa, a cerca del Consejo Real,

*«su principal instituto tracta de las cosas que son del gobierno destos Reynos, assí de las que miran a la institución y reformation de las costumbres y vida política como de las que tocan a la conservación y aumento del estado real y bien público, y ninguna se tenía por tan agena de aquel gran tribunal como embarazarse en veer y determinar pleitos particulares entre partes. Y por esto le applicaron las leyes, limitadamente, aquellos [negocios] que tienen la maior parte del dicho gobierno y que andan muy juntos con él»,*

como eran las residencias, las tenutas, lo eclesiástico...

*«y aunque por las mismas leyes, el Consejo puede advocar y retener otras causas, por ellas se encarga que sea con causa y necesaria para el dicho gobierno».*

Por esta razón los pleitos «que consisten en pura justicia», fueron encargados a las audiencias y chancillerías y, por tanto, ni el supremo tribunal no debía ocupar la mayor parte de su tiempo en ellos ni sus ministros ser simples jueces. Pues

*«si bien el dicho gobierno de que ha de tractar el Consejo ha de ser con justicia y conforme a ella, y assí es necesario que sean grandes letrados los dél, todavía la parte más esencial que, con serlo, deben tener es que sean de grande y universal experiencia en los negocios y que los ayan visto y tractado y gobernado mucho tiempo, para que con ella y con la noticia de lo passado, acierten mejor en lo presente y que adelante ocurriera. Y si en todo tiempo fue esto conveniente y necesario, es lo más mucho en éste, porque aunque todos los que ay en el Consejo tienen consumadamente las partes que se requieren, ay algunos nuevos en la práctica y en aquella manera de gobierno con justicia, porque es de maior consideración que haviéndose de proveer hogaora tres personas en las tres plazas que vacan, se procuren tales que en su edad, noticia y experiencia universal de cosas, se halle lo que es menester para sí y para ayudar y encaminar a los otros».*

Terminaba mostrando su recelo hacia la presencia de clérigos en el Consejo,

*«porque, como de las materias principales que allí se tractan y más frecuentemente ocurren es la de las bulas y letras apostólicas que se expiden en Roma y por el Nuncio, assí contra el Concilio y Patronazgo y Leyes del Reyno, como las que tractan novedades perniciosas al gobierno y perpetuidad dél, los tales eclesiásticos excusámonos de tractar semejantes materias y, quando los tratamos, es peor por el scrúpulo y miedo con que vamos en ellas».*

Y lo mismo ocurría, continuaba, con las materias criminales, por lo que continuamente se entorpecía el curso normal de los negocios. Por estos motivos, concluía pidiendo al rey que «obie y no de lugar a la mano libre que se va tomando para quitar

y derogar la suprema y Real jurisdicción, que VM. tiene en estas cossas»<sup>51</sup>). Frente a la preocupación principal del Rey, la prepotencia de la figura del presidente, don Hernando volvía a recoger la disputa entre las *experiencia* y las *letras*, es decir cargaba las tintas en el predominio de los juristas el Consejo y su tendencia a tratar las cosas de gobierno con los parámetros de la administración de justicia. Pero añadía algo más, y de mucha mayor importancia, había que evitar el predominio de los eclesiásticos dentro del Consejo; recomendación que tenía un enorme significado por el papel que a partir de la segunda mitad del siglo XVI tenían los recursos de fuerza para fijar los límites de la jurisdicción de la Iglesia.

No parece, sin embargo, que el rey estuviera ya muy preocupado por la disputa entre *letras* o *experiencia*, ni tampoco a los colaboradores más cercanos del rey. Así se deduce de un apunte sobre «las principales advertencias que parece se deven hacer al que agora es Presidente», de las mismas fechas, donde la máxima preocupación está cifrada en el control sobre la actuación del Consejo. Lo principal de los puntos tratados en dicho papel se dirigía a cercenar el influjo de la Presidencia sobre el funcionamiento habitual del tribunal. Su artículo primero, acorde con las instrucciones que Felipe II dio a Rodrigo Vázquez de Arce en 1592, señalaba

*«que pues... está proveído que los dichos presidentes no tengan voto alguno en materia de justicia ni decisivo en las de gobierno, estén muy advertidos de no dar a entender por palabra ni otra demostración alguna, por muy ligera que sea de pasión y de propósito, la inclinación o afición que tengan para que en los negocios de justicia se tome una o otra resolución, contentándose con hacer solamente officio de presidentes para el gobierno del Consejo, mandando juntar las Salsa y nombrando los jueces que les pareciere para ver y votar los pleitos y negocios. Sin que directe ni indirecte se entienda, o pueda presumir, que tengan afición alguna a las partes, mandándoles muy precisamente, que no hablen en la vista de los pleitos de justicia de ellos, antes ni al tiempo ni después que se vieren o aian visto las causas...».*

Los siguientes capítulos de la «advertencia» se dirigían a hacer cumplir las leyes recopiladas, e impedir las maniobras interesadas del presidente y de los consejeros en la tramitación de los negocios. Así, en primer lugar, recordaba lo dispuesto en la Nueva Recopilación (2.4.17, 35 y 38), donde se establecía que los pleitos, incluidos los de segunda suplicación y las residencias, debían verse, concluirse y determinarse por su antigüedad sin interrumpir su curso hasta la determinación. Un segundo punto en el que incidían las advertencias, miraba al mantenimiento de los consejeros nombrados para tratar de los diversos asuntos. Según uno de sus párrafos,

*«los mismos jueces que han visto y determinado qualquier pleito en vista, lo vean y determinen en revista, sin que el Presidente los pueda mudar y acrecentar sin orden expresa de SM.».*

Mientras que en caso de muerte o enfermedad los que entrasen, debían subrogarse en el lugar de los ausentes, sin aumentar ni disminuir el número de los jueces. La continuidad de los jueces que consideraba todavía más necesaria en las residencias, donde no debía tener cabida el arbitrio de los presidentes; pues, según disponía la ley, NR. 2.4.39, las residencias debían verse sin ninguna interrupción

*«sin que aya mudança de jueces para la vista de las residencias de los ministros principales y de sus oficiales. Y porque con ocasión de que en las palabras finales de la dicha ley se dice que aquello se cumpla, sino fuere por enfermedad o ausencia de los jueces o por otra justa causa, y con esta ocasión muchas veces se mudan los jueces en la vista de las residencias, pareciendo a los presidentes que la dicha ley se lo permite con causa y tienen por bastantes qualquiera que a ellos les parezca».*

Por lo que era preciso declarar que los presidentes,

*«sin embargo de que la dicha ley parece que permite que por otra causa los pueda mudar, no lo puedan hacer».*

El margen de maniobra de la presidencia debía reducirse más todavía en las residencias, ordenando, de una parte, que no se dilatará la ejecución de la sentencia que pronunciara el Consejo y, por otra, prohibiendo que nombrara jueces especiales para su realización. Ésta debía corresponder al que entraba en el cargo del residenciado, con el consiguiente ahorro de salarios a las comunidades, salvo en los corregimientos y gobernaciones más importantes. Precauciones semejantes debían tenerse en las visitas, conforme a la ley recopilada (NR, 24.36).

Las advertencias entraban de esta forma en una segunda cuestión, el nombramiento de jueces delegados y comisarios por el consejo, que era una fuente muy importante de poder efectivo para el presidente, pues con la elección de las personas para estos encargos podía influir en el resultado que obtuviera según fueran sus intereses y, además, dejaba en sus manos un instrumento clave para crear a su alrededor una tupida red clientelar, minúscula, si se quiere, pero muy efectiva<sup>(52)</sup>. La costumbre de dejar al albur de la presidencia la designación de estos cargos, según el escrito, había tenido unos resultados catastróficos,

*«como es aver usurpado haciendas ajenas y muchos de ellos se han ausentado con las condenaciones aplicadas a la Cámara y a otras partes, de tal manera que no han podido ser havidos. Lo qual ha procedido de no ser conocidos, aprovados ni abonados y de proveído por fabores y respetos particulares».*

Para remedio, la propuesta era que se eligieran veinte o veinticuatro personas, entre los letrados «más antiguos y aprovados» que rondaban por la Corte y que entre ellos se nombrase, cuando llegara la ocasión, a los comisarios o jueces delegados. Este sistema habría de establecerse,

*«sin que se pudiese alterar ni mudar por el Presidente en manera alguna».*

Precaviendo también, que una vez elegido el letrado,

*«se ordene al Presidente... le nombre, sin suspender ni dilatar el nombramiento... Y se ha visto muchas veces dilatar tanto el nombramiento, aguardando a que la persona a quien quiere gratificar con él, venga de otra comisión...».*

Como vemos, las limitaciones que preveía el autor del papel, no eran sino una ampliación de la primera de las condiciones que Felipe II quiso imponer a la Vázquez de Arce en 1592. El autor de estas «advertencias» consideraban necesario limitar aún más el margen de maniobra del presidente dentro del tribunal y, de esta forma, creía necesario, de una parte,

*«que se mande precisamente que lo que en qualquier caso huviere proveído todo*

*el Consejo, no se pueda alterar ni determinar sino por todo él, por ser muy conforme a buen gobierno y administración de justicia».*

Por otra, con el fin de evitar la manipulación del presidente en los asuntos gubernativos, resolviéndolos con los consejeros de su elección, debía señalarse día fijo para que el Consejo pleno los tratara y decidiera. Sibilinamente el escrito advierte como conclusión que,

*«por causa de ser el presidente muy inclinado a hacer ver y despachar pleitos de justicia y muy poco al gobierno, se pasan muchos días (y aún algunas semanas) que no se ve ni trata cosa tocante a gobierno, con ser el principal cargo del Consejo, y aver muchas cosas dél, generales y particulares, represadas y suspendidas, que requieren brebe resolución, se le ordene que a lo menos un día en semana (que parece será a propósito el miércoles) no se trate en el dicho Consejo, sino sólomente de ver y resolver cosas tocantes a gobierno, sin que se pueda ocupar en otra cosa alguna, ni repartir las salas, sino que todo el Consejo junto se ocupe en ello».*

A la luz de todas las apuntes que hace el autor del papel, más que el retraso de los negocios, su preocupación radicaba en amplísimas posibilidades de manipulación que tenía el presidente<sup>(53)</sup>.

A finales de 1597 Felipe II decidió llevar a delante la reforma que se le había resistido, al menos, más de un cuarto de siglo, y diez meses antes de su muerte puso las cartas sobre las mesa. El 15 de noviembre el rey dirigió al presidente Rodrigo Vázquez de Arce la *Instrucción*, donde esbozaba la Ordenanza que pensaba promulgar. El papel exponía sin rodeos los tres ejes que orientaban la voluntad del monarca:

*«[I] apartar del Consejo una sala de gobierno, que con particular cuydado trate de los negocios dél, como cosa tan importante, y [II] juntamente sobre dar alguna buena traça en la vista y despacho de las causas del justicia... [III] y también nombrar doze o oatorze personas de entera satisfacción para reissidencias y otras comissiones».*

Felipe II volvía a tres de las condiciones que había pensado cinco años antes poner al oficio de la presidencia, vistas más arriba. Para llevarlo a cabo se debía crear la susodicha sala de gobierno, que estaría formada por cinco consejeros, remarcando tres puntos; el primero

*«que éstos ayan de ser a elección y nombramiento mío y por tiempo de un año».*

El segundo, que el presidente debía asistir a ella con la mayor asiduidad posible. Y, finalmente, que

*«de lo que se tratare en esta sala, no sea menester dar quenta en Consejo, por escusar el rodeo y dilación que esto sería, sino que se me de a mí».*

Por primera vez aparece la voluntad real para que la sala de gobierno, quedará desajada en gran medida del resto del Consejo. Así mismo, el monarca señalaba que el resto de los consejeros se habrían de dividir en tres salas de justicia, donde se despacharían los pleitos,

*«que han de quedar assentados por tabla y por su antigüedad... Pues será para descargo de la conciencia de todos y de descanso para vos y concierto para los juezes y mucho beneficio de las partes».*

Por último la *Instrucción*, entraba en la elección de personas letradas entre las que se nombrarían los jueces delegados y comisarios para los negocios que considerase el Consejo. En este punto el rey accedía a que la designación de los mencionados fuera por dos años, «como también apuntáis»<sup>(54)</sup>.

El presidente, que como acabamos de ver, fue oído antes sobre las reformas a introducir en el Consejo, se sintió profundamente decepcionado por las intenciones del rey, al fin y al cabo, él era el principal afectado por el proyecto real. Tanto malestar, que Vázquez de Arce redactó al menos tres papeles para responder al rey<sup>(55)</sup>. En un primer momento, el presidente pensó centrar su oposición en dos puntos, las leyes y la autoridad del Consejo; según sus palabras, llevar adelante la reorganización del tribunal, decía,

*«es volver de dentro a fuera todo su gobierno y deshazer todas las leyes scriptas cerca dél... con ello se quita al Consejo y a quien en él presidiere, el auctoridad que hasta aquí ha tenido en el gobierno y administración de justicia, mediante lo qual, y el favor que VM. y sus antecesores le han dado, se han estos Reynos conseruado y la fee cathólica...».*

El resultado sería quitar «fuerza a la justicia», y por tanto

*«qualquier movimiento se endereçaría de golpe contra la persona y auctoridad real, que tanto conviene quede conseruada para darla a sus juezes supremos del tribunal cabeza de la justicia, el qual, por esto, se debería tener por cosa sagrada o inaccesible, pues son los que más vivo representan a la Persona real. Y mal se podrá conserbar ésta reputación resolviéndose como está dicho».*

Por todo ello, para descargar su conciencia, lo ponía en conocimiento del rey y pedía licencia. En pocas líneas el presidente sintetizaba la esencia de la teoría del consejo, pero, por eso mismo, era demasiado fuerte para presentarla al rey. En un segundo papel dejaba de lado todas estas consideraciones de fondo que atañían a los fundamentos últimos del poder real y entraba exclusivamente en los agravios que recibía la figura del presidente. Después de hacer una difusa mención de lo ocurrido cuando se le nombró, «el mes de abril hará 6 años», recordaba que el confesor Chaves le había asegurado que no se impondría ninguna condición al ejercicio de la presidencia. Por esa razón, no entendía el porqué ahora el rey volvía ahora con la misma idea,

*«en tal manera -decía Vázquez de Arce al propio Felipe II- que aya de quedar este oficio más desautorizado de lo que esta por lo pasado y que yo padezca una afrenta pública tan conocida... porque en tal estado menguado de onrra, no podría satisfacer a las obligaciones del cargo, antes ninguno de los públicos se puede bien servir sin auctoridad, cuánto más el mayor dellos».*

Por estas motivos el presidente pedía licencia para retirarse. Pese al disgusto de Rodrigo Vázquez, Felipe II no estaba dispuesto en esta ocasión a desdecirse de sus planes. Su principal argumento miraba a anular el principal argumento, la promesa de no variar las condiciones del oficio, porque

*«de lo mismo que decís... sobre que no aya novedad en lo que se ordenó de my parte, ni lo es ordenar lo que conviene al gobierno y a la justicia, sino reducirlo a sus partes y descargar [...] l la conciencia con beneficio destos Reynos i a los que me havéis de ayudar».*

Felipe II no cerraba la puerta a la negociación y concluía recomendando que reci-

biese «el consejo que os dará, de mi parte, don Christóbal y la boluntad con os le embió y conformaros con él, pues será lo mejor para todo».

Entre Moura y Arce debieron entablarse las negociaciones preconizadas por el monarca; por la parte del círculo más íntimo al rey, la propuesta la conocemos por un decreto totalmente terminado, a falta de rellenar la fecha y de rubricar. Del otro lado, la posición del presidente debía coincidir bastante con unas advertencias que se hallan entre sus papeles, que llevan por título «Advertencias que tocan al Consejo». La comparación entre ambos documentos muestra la distancia que separaba a ambas posturas. Según el abortado decreto, la intención era la ya conocida, dividir a los consejeros en salas para «declarar y distinguir cuáles y cuántos han de tratar lo del gobierno y cuáles los de la justicia», para la «mayor y más breve expedición» de los negocios. Los puntos principales se centraban en cuatro cuestiones que miraban a las facultades del presidente, a las atribuciones de la sala, con especial referencia las de gobierno, a la relación entre ellas y respecto al Consejo pleno y, finalmente, al nombramiento de los jueces para las comisiones, que engarzaba directamente con el margen de maniobra del presidente. En cuanto a éste, el primer capítulo no se paraba en mientes e iba al grano con toda crudeza:

*«que para lo del gobierno se aparte una sala de cinco del Consejo, quales eligiré y nombraré a principio de cada año, dejando de cada año precedente para el siguiente, los que me pareciere [para] que informen y den luz a los que entraren de nuevo.»<sup>(56)</sup>*

El rey, sin más, debía nombrar los de gobierno conforme lo considerase oportuno, sin dar cuenta de ello ni al presidente ni al tribunal. Ese control quedaba reforzado, al disponer más líneas después que si faltase uno o dos de los cinco consejeros designados, continuase la sala sin más, pero que si eran más los ausentes «se me consulte para que lo mande proveer». A continuación enumeraba las atribuciones de la sala de gobierno con bastante detalle; por contra, en las tareas de las salas de justicia la nota era la indeterminación, limitándose a consignar que los restantes once consejeros debían repartirse

*«en tres salas, una de las quales se ocupe continuamente en ver y despachar negocios de rrepública, que requieren brevedad, y los de mill y quinientas y residencias, mudándose a tiempo, según se pidió y otorgó en las Cortes de mil y quinientas sesenta, entendiendo que quando se hayan de ver los dichos negocios de mil y quinientas, no ha de ser con menos de cinco jueces».*

Los magistrados destinados en estas salas debían resolver, además, «los expedientes y negocios» señalados por las ordenanzas anteriores. Es decir, el presidente según esta primera redacción de las ordenanzas aún tenía una importante porción de poder. El proyecto, no obstante, el proyecto una buena porción del arbitrio presidencial, y de los consejeros, en lo tocante al orden del despacho en las salas de justicia, ordenando que éstos «se pongan en tabla y despachen por la orden de antigüedad della».

Por lo que miraba a la posición de la sala de gobierno frente al resto del Consejo, este primer proyecto establecía su neta independencia, disponiendo que los consejeros preparasen sus despachos y consultas

*«sin que hayan de dar de dar noticia dello a los demás del Consejo».*



Sin embargo, no quedaba totalmente separada, pues en lo relativo a la tramitación, solo debía haber un único semanero para supervisar promiscuamente todos los despachos del tribunal, mientras que, al mismo tiempo, los consejeros de gobierno podían intervenir en los asuntos de las demás salas. Así el decreto *non nato* establecía que

*«que los expedientes y otros negocios que ocurren al Consejo, conforme a las ordenanzas, se deparacharán por los demás consejeros que restaren y por los de la dicha sala de gobierno, quando les fálata ocupación en lo que les ha de tocar. Y quando estubiere cumplido en ella el número de los cinco, que ha de haber, y hubiere falta de un consejero en otra de dichas salas, se pueda sacar de la de gobierno, para que no se deshaga y pierda una sala, que sería de mucho inconveniente para el despacho».*

Sí aparecía ya, en cambio, la superioridad de la sala de gobierno respecto a las demás, pues correspondía a ella conocer

*«todas las competencias y diferencias qualesquier tribunales destos Reynos que residieren en la Corte o fuera della, entre sí o con las justicias hordinarias».*

Supremacía manifestada, además, por la obligación del presidente de asistir en ella y, también por ser allí donde el Fiscal debía dar cuenta de lo que estuviera a su cargo, conforme a lo ordenado en 1554. No obstante, el frustrado decreto no diluía por completo las funciones del Consejo pleno, pues debía continuar juntándose los viernes «a ver los negocios que están remitidos a consulta». Finalmente el rey disponía que se designarían catorce letrados, por un periodo de dos años, entre los que se eligiera a los «que hayan de tomar las residencias y hazer justicia entre otras qualesquier comisiones, ciberales y criminales que se acordaren por lo demás del Consejo Real y de todos los otros Consejos y tribunales de la Corona de Castilla que residen en la Corte»<sup>(57)</sup>.

La postura de Vázquez de Arce estaba en las antípodas. Según las «Advertencias...» toda reforma debía bascular sobre el mantenimiento de la preeminencia del tribunal y de la propia figura del presidente,

*«por ser éste medio entre SM. y el pueblo y depender dél la buena elección de los otros ministros y consejeros y descanso y alivio de SM. en quanto a la administración de justicia».*

Por tanto no hacía falta ninguna nueva ley ni ordenanza, sino, en primer lugar,

*«dar mucha auctoridad a este Consejo, favoreciendo a los dél, haziéndoles merced y honrrándoles, y todo por mano de su Presidente».*

Con el mismo fin -segunda propuesta- ningún negocio, ni de justicia ni de gobierno, se debía sacar del tribunal para llevarlo a junta particular alguna; en todo caso, que entraran las personas adecuadas para informar en él. Con ello se ganaría en tiempo y se garantizaría la justicia de lo que se resolviera, guardando así los

*«términos ordinarios de derecho, por quanto es parte de la justicia el modo de hazerla y el tiempo y lugar donde se haze»*<sup>(58)</sup>.

Por último, en había el rey había de afirmar la superioridad,

*«como es el Consejo de Castilla supremo y donde se deve apurar y ajustar lo proveído por los otros consejos quando convenga, no es justo que sea en nada moderado ni excluido por ningún otro consejo ni junta...».*

El presidente apuntaba a una materia muy concreta y unida a la majestad real, como parte integrante de ella, las competencias; el tribunal que decidiera en ellas, de verdad sería el más supremo de todos. Con estas premisas Vázquez de Arce pasaba revista a las cuestiones del funcionamiento cotidiano del Consejo, que en nada modificaban lo sustancial. Dos puntos concretos destacaban; uno era el protagonismo que daba a los relatores, señal de la idea que tenía del ejercicio del gobierno como manifestación específica de la justicia. El otro tenía más calado, admitía la necesidad de que para el despacho de los expedientes y negocios se pudieran los consejeros

*«apartar en salas y ver en ellas, con los relatores, los expedientes de mayor calidad, quedando con el presidente cuatro consejeros, los que le pareciere más conveniente para tratar las cosas de gobernación, porque no se ocupe todo el Consejo en solo esto, sino en los casos grandes y extraordinarios, porque así nunca se falte a los negocios de justicia y a los de gobierno».*

Sí, Rodrigo Vázquez de Arce aceptaba la necesidad de formar una sala de gobierno, pero formada por los consejeros que el eligiera; de aceptarse su proyecto, su protagonismo no sólo quedaría intacto, sino además confirmado por el propio rey<sup>(59)</sup>.

Entre el mes de diciembre y primeros días de enero, se redactó un segundo proyecto de Ordenanzas mucho más elaborado que el anterior. La declaración de las intenciones del rey quedaba intacta, el dividir a los consejeros en salas para el gobierno y para la justicia y mucho más minucioso en lo que tocaba a recortar las prerrogativas del presidente y a la escisión de sala de gobierno. Respecto a lo primero, intervención del rey en el nombramiento de los consejeros de las distintas salas, no se limitaba como en el primer esbozo de ordenanza a la del gobierno, ahora se incluía también la de mil y quinientas. Así, ahora, el proyecto pactado disponía

*«que, por lo del gobierno, se aparte una sala de cinco del Consejo quales yo eligiere y nombrare en principio de año».*

añadiendo que en caso de que faltarán más de dos ministros, «se me consulte para que lo mande proveer». Y, además, ordenaba que, en cuanto a los jueces para los recursos de la segunda suplicación, se apartaran otros cinco,

*«los quales también nombraré al principio de cada año».*

No descuidaba, además, el precaver el posible influjo del presidente sobre el dictamen de los ministros, mandando que el presidente tuviera voto en lo gubernativo, pero sin advertir nada a cerca de su comportamiento o inclinación. Junto a ello, se enumeraban con mayor precisión las atribuciones de las salas de justicia, con lo que disminuía la facultad presidencial para encargar los distintos asuntos, según su capricho, entre los consejeros. A su vez mantenía lo establecido en el primer proyecto sobre la obligación de despachar los negocios por su antigüedad según la tabla de ellos.

El tercer aspecto, la posición de la sala de gobierno dentro del Consejo, este segundo texto seguía el camino ya trazado, pero reforzado sensiblemente. La independencia de la sala no dejaba casi ningún resquicio; de un lado, se recogía la propuesta del primer dispuesto en el primer decreto, con ese matiz lleno de intención del «sin que ayan de dar noticia de ello a los demás del Consejo». Por otra, mandaba que en ningún caso entraran los del gobierno en las otras sala; así cuando hablaba de los negocios y expe-

dientes que debía despachar el Consejo conforme a sus ordenanzas anteriores, establecía que

*«se despacharán por los demás consejeros que restaren, fuera de la sala de gobierno. Y quando huviere falta de un consejero en una de las dichas tres salas de justicia, se tomará el más nuevo de una de las otras, para que no se haga ni pierda una sala. Y en los pleytos remitidos por qualquiera de ellos, se le juntará lo otra. Y no se conformando, la tercera».*

Tampoco se admitía la promiscuidad de los consejeros judiciales y gubernativos en supuesto alguno, remachándolo al disponer que el Fiscal entrase en esta sala,

*«donde se avrá de tener más particular cuenta con las cosas fiscales, que no fueran pleytos entre partes, porque de ningunos pleytos ha de tratar esta sala ni los de ella, para que puedan mejor atender a lo del gobierno».*

La independencia, además, tenía su expresión en cuanto la supervisión de los despachos debía estar a cargo «del *semanero de la misma sala*». Así mismo, el borrador mantenía la superioridad respecto al resto del Consejo, conforme a lo fijado en el proyecto de decreto anterior. Sólo mencionaba, como punto de encuentro entre los consejeros de gobierno y de justicia, que continuara juntándose el tribunal en pleno para la consulta de los viernes. Sin embargo añadía que allí «no se buelva a votar lo que estuviere ya», tendente a evitar no sólo la pérdida de tiempo, sino también que los magistrados pudieran cambiar las consultas acordadas y, por tanto, que el consejo pleno pudiera inmiscuirse en temas de gobierno. Por lo que tocaba a la preeminencia, mantenía todo lo anterior, añadiendo una nueva atribución a la sala de gobierno, lo concerniente a la nueva legislación. Según el texto, tras encargarla de cuidar del cumplimiento de las leyes y ordenanzas

*«y si por curso de tiempo o otras causas que lo pidan, conviniere mudar alguna ley o ordenança, en tal caso, después de mirada con mucho acuerdo, se avrá de consultar...».*

Finalmente, en lo relativo al nombramiento de personas letradas para las comisiones, este segundo proyecto continuaba la pauta marcada por el anterior, pero abría la duda de si las catorce personas letradas que se habían de elegir, «serán para las comisiones de sólo este Consejo y otras para los otros tribunales y a cuya la nominación». Cuestiones de cierta importancia, puesto que, lo primero significaba que si todos los jueces delegados o comisarios dependieran del Consejo, estarían sujetos a él en mayor o menor medida, cualquiera que fuese el tribunal que les diera la comisión. Lo segundo, en la medida que el nombramiento de estos encargos era una de las principales armas en manos de presidente<sup>(60)</sup>.

El nuevo texto se pasó a manos de Rodrigo Vázquez de Arce antes del 12 de enero, para que hiciera sus observaciones, las cuales, junto al dictamen de la Junta de noche, se elevaron al rey. Los principales reparos que opuso el presidente, iban en una doble dirección, contra las limitaciones puestas a las facultades de su oficio y contra la completa segregación de la sala de Gobierno. Respecto a lo primero, aunque guarda silencio respecto al nombramiento de los consejeros para lo gubernativo, cuando llega a la elección de los ministros de la Sala de Mil y Quinientas, sugiere que donde se decía

*«los quales también se nombraran a principio de año, se podrían quitar estas*

*palabras y nombrar SM. los jueces de Mil y Quinientas quando el caso se offrezca, o poner los quales nombraré quando los casos se offrecieren».*

La Junta mantuvo una postura ambigua, opinando que «podríase poner 'los quales se nombrarán a su tiempo'». En cuanto a la total independencia de la sala de gobierno, Arce hiló mucho más fino, y donde el proyecto acordado establecía que ésta hiciera sus provisiones y consultas

*«sin que aya de dar noticia de ellos a los demás del Consejo».*

sugirió que dijera

*«sin que ayan de dar parecer en ello los demás del Consejo»,*

matiz que rebajaba sensiblemente la independencia de la Sala. La Junta en este caso se pronunció a favor de la propuesta, creyendo que «podría ponerse en la forma que advierte el presidente». De igual manera, don Rodrigo pidió que en cuanto a la tramitación del despacho sala de gobierno, donde este segundo proyecto ponía que la supervisión corriera por el semanero

*«de la misma, diga del Consejo»;*

lo que implicaba que el control de los despachos estuviera sometido indistintamente y por turno a todos los consejeros, con la consiguiente intervención de ministros ajenos a la sala en materias gubernativas. También a ello accedió la Junta. Tampoco el papel del Consejo pleno frente a la sala de gobierno, no quedó fuera de las preocupaciones del presidente y, además, en asunto tan importante como era la legislación. Por eso la junta debió tratar del problema y representó al rey que

*«también se le comunicó al presidente el modo que podría tener quando se huviesen de hazer leyes y dize que para hazerlas se junte todo el Consejo, como está ordenado».*

Objeción que la Junta hizo suya con un lacónico, «assí como lo dize el presidente», sin apreciar la importancia que tal materia tendría en un futuro casi inmediato. El resto de las observaciones expuestas miraban a cuestiones de detalle que en nada cambiaban el proyecto. Excepto en un extremo, en el que pedía que donde se decía que en las salas de justicia tratase de las causas que le tocaban por las ordenanzas anteriores

*«sin advocar las que son de otros tribunales, se ponga sin advocar las que no le tocan»,*

punto en el que se accedió a «lo que advierte el presidente». Sin embargo la revisión efectuada por la Junta sirvió para que se pusiera sobre la mesa una cuestión de suma importancia, lo que tocaba a los recursos de fuerzas, clave para definir las relaciones entre el poder temporal y el poder espiritual. La nota de despacho informaba al rey de que la junta trató con el presidente sobre

*«en qué forma quedará lo de las fuerças, de que no se haze mención en las cédula. Y dize que lo de las fuerças de juezes ecclesiásticos va a las Chancillerías y audiencias destos Reynos. Y al Consejo solo vienen las de los juezes ecclesiásticos que residen en la Corte y las fuerças o demasías que los juezes ecclesiásticos, se pretende, hazen en quebrantamiento del concilio de Trento, por estar reservado el cumplimiento y execución de las cosas en él contenidas a SM., para que se le puedan consultar los casos que pareciere convenir, pues lo tiene SM. mandado. Y si fuere servido no se haga, se podrá remitir a los otros tribunales susodichos».*

La postura de la junta fue en esto tajante y propuso al rey «que lo de las fuerças se trate en sala de gobierno», que de esta manera recibió una de sus atribuciones más importantes, al darle competencia para resolver los conflictos que se produjeran en la Corte entre la jurisdicción eclesiástica y las seculares. Lo que significaba, implícitamente, convertirla en la instancia suprema en estas materias, en la medida que su principal oponente en estas sería, a partir de entonces, el tribunal de la Nunciatura<sup>61</sup>.

El rey dio el visto bueno a las enmiendas que le presentó la junta y ordenó, según anotó el secretario al margen de la nota de despacho, «estender esta minuta, la qual manda se vea en la Junta, para que lo tengan entendido y por sy algo se le ofreciere». Así se hizo y se redactó un tercer proyecto, el que debería haber sido el texto definitivo de la Ordenanza, recogiendo todos los matices expuestos, excepto en lo que miraba a la advocación de causas y en lo del semanero propio para la sala de gobierno, en donde se mantuvo la redacción anterior, pese a haber admitido las observaciones hechas por el presidente. Pero, y es fundamental, sí se añadieron las propuestas referentes a los recursos de fuerza y la intervención en materia legislativa. En lo primero, el texto redactado decía que

*«los negocios que se ofrecieren en materia del remedio de la fuerça, assí en lo que tocaren a las cosas dependientes del Concilio. como los juezes eclesiásticos ordinarios que residen en la Corte y junto a ella, yrán a la sala de gobierno y las demás materias que se ofrecieren en estos Reynos, a las Chancillerías que tocaren».*

En lo segundo, quedó que

*«si por el curso del tiempo o otras causas que lo pidan, conuinere mudar alguna ley o ordenança o hazerla de nuevo o dispensar con ellas, en tal caso, después de mirado con mucho acuerdo, por la orden y estilo acostumbrado en el Consejo, se me havrá de consultar...».*

Victoria importante para la autoridad del Consejo en pleno frente a la sala de gobierno. También el nuevo texto resolvía, a medias, lo referente al destino de las personas letradas para las comisiones, una cuestión no tocada en la junta, pero sí apuntada en el proyecto. En la nueva redacción quedó establecido el número en veinte, y no catorce como anteriormente se propuso, y, además, que

*«quedarán señalados doze para servir en las comisiones que emaneren del Consejo Real»,*

dejando entonces dos posibilidades abiertas, bien que

*«de los ocho restantes, quatro para lo del Consejo de Hazienda y Contaduría y otros quatro para lo del Consejo de Órdenes, y cada consejo podrá ocupar libremente a los suyos en lo que se ofreciere».*

O bien, que

*«los ocho restantes, para lo demás que se ofreciere y yo mandare».*

Se introdujo, además un capítulo destinado a salvaguardar el secreto de lo que se tratara dentro del Consejo. Tal fue el último proyecto<sup>62</sup>.

Fue entonces cuando debió tener Vázquez de Arce su intervención definitiva, que supuso un otro sutil matiz, pero de larguísimo alcance, en lo que relativo al nombramiento de los ministros para las salas y de las personas letradas para las comisiones. En

los tres casos logró que el texto definitivo fuera obligatorio la intervención de la presidencia:

*«que para lo del gobierno se separe una sala de cinco del Consejo... quales yo eligiré y nombraré en principio de cada año, haviéndomelo consultado vos el presidente».*

*«... y quando se ayan de ver los dichos negocios de mil y quinientas, no ha de ser con menos de cinco jueces... los quales también nombraré al principio del año, consultándomelo el presidente...».*

*«y dichas personas [para las comisiones], después de havérmelas consultado el presidente, les despacharán sus cédulas firmadas por mí...».*

En cuanto a éstos últimos quedó establecido que doce estuvieran a disposición del Consejo y los otro ocho sirvieran para todas las comisiones «que emanaren de esta Corte, conforme a lo que yo mandare», evitando mencionar cualquier rastro que diera lugar a que el Consejo se entrometiera en los demás tribunales. Junto a lo anterior se introdujo una precaución para contrarrestar las posibles maniobras del presidente, previniendo que en la materias de gobierno votara el último,

*«sin dar antes ningún indicio ni significación de su intento y parecer, para que más libremente puedan los otros de la misma sala declarar el suyo...».*

Observación que sólo apareció en el primer proyecto de la Ordenanza. Un pequeño cambio también se introdujo en la redacción final, al hablar de la intervención del Consejo en la formación de nuevas leyes, que rebajaba su tono imperativo; donde el rey decía que en estas materias «se me habrá de consultar», quedó en un «se me consulte».

Con tantas sutilezas las intenciones originarias de Felipe II quedaron seriamente trastocadas. Ni la sala de gobierno quedó escindida del resto del Consejo ni la presidencia vio cercenadas sus facultades hasta donde hubiera deseado el monarca. En cuanto a lo primero, el Consejo en pleno seguiría conociendo las materias más delicadas y, aunque sin voto en las materias de más importantes de gobierno -en principio-, sí lo mantuvo en las materias de legislativas. Por su parte, el presidente vio reconocida su preceptiva intervención en la elección de los magistrados que debían conocer de los asuntos gubernativos y judiciales más importantes, los recursos de mil y quinientas, las residencias y las visitas. Más que recortar su preeminencia, regulaba su ejercicio.

La nueva disposición fue leída «en voz alta» el día 21 ante los consejeros, que, «vista, la obedecieron con el acatamiento debido», con lo que las Ordenanzas quedaron publicadas. Dos días después, «el señor Presidente y señores del Consejo, respondiendo a la dicha Cédula de SM., dixeron que estavan prestos a hacer y cumplir lo que SM. por ella les manda»<sup>(63)</sup>. Entre tanto, el día 17 el rey dio su decreto nombrando a los respectivos jueces de la Sala de Gobierno y de Mil y Quinientas<sup>(64)</sup>.

La Ordenanza fue puesta en aplicación de inmediato, así lo atestiguan las notas de despacho de la Junta, donde aparecen las reseñas de las consultas de la Sala de Gobierno<sup>(65)</sup>. alguna dificultad, no obstante, debió producirse en la aplicación efectiva de la Ordenanza. La primera que pese a lo ordenado

*«de aquí adelante huviese dos semaneros, el uno particular de todo lo que procediese de la Sala del gobierno y que éste fuese uno de los cinco nombrados para ella*

*y que todo de todo lo demás fuesse otro de los juezes nombrados para las otras salas restantes, parece que sería cosa conveniente que en lo tocante a la semana se guardase la orden antigua, que es que huviesse un solo semanero...».*

Por otra parte, al no haber aumentado en dos plazas más el Consejo,

*«sin los cuales, como está advertido, se tiene por imposible que pueda aver número bastante para las quatro salas, habiendo de asistir diez en las de gobierno y segunda suplicación».*

se consideraba que cuando fuere necesario, salga de la última de estas de los

*«cinco, los más modernos della. Porque con haser así, se escusarían algunos inconvenientes que de remitirlo a la disposición del presidente podrían resultar».*

Urge la necesidad de que se nombren las personas para las comisiones. Se haga lo mismo con los receptores<sup>(66)</sup>.

### III.

La oposición del Consejo no va a hacerse esperar, poco después de muerto Felipe II tenemos noticias de que su malestar se unía al sentimiento de la corte contra el estilo de gobierno implantado por el rey fallecido. Un escrito dirigido al nuevo soberano así lo hace saber:

*«La misma merced y favor [que la de suprimir la Junta de Policía] hará VM. a estos en mandar que no passe adelante la nueva horden que se dio para el despacho de los negocios del Consejo de Castilla, repartiéndolos en Salas con todas las demás circunstancias que tiene la horden. Porque lo que verdaderamente ha resultado desta [reforma] y de la passada [la de la Cámara ?] no a ssido sino a desacreditar y tener en poco los tribunales que tanto se deven estimar, confusión y dilación de los negocios y grande de las partes, sin otros infinitos inconvenientes que cessarán cessando lo uno y lo otro y el descontento universal que ha caussado, se convertirá en contento que asegurará las grandes esperanças que se tienen del justo gobierno de VM.»<sup>(67)</sup>.*

La presión del Consejo tuvo resultado, la Ordenanza fue revocada antes de que cumpliera el año, el 10 de febrero de 1599, por Felipe III:

*«El Rey. Presidente y lo de Mi Consejo. Ya sabéis que el Rey mi Señor, que Santa Gloria haya, por una zédula firmada de su Real mano, fecha en quatorce [sic] de febrero del año pasado de noventa y ocho, mandó dar para el despacho de los negocios de gobierno y justicia que en ese Consejo se tratan y cerca de otras cosas que en ella se contienen. Y porque me habéis consultado todo los inconvenientes que della se siguen, deseando excusarlos y que con más brevedad es expidan y libren, por la presente mando: Que de aquí adelante cese lo contenido en la dicha zédula y que hagáis guardar y se guarde la orden que antes de la data della se tubo por lo pasado, conforme a las Leyes, zédulas y ordenanzas de los Señores Reyes mis progenitores, y que en los viernes de cada semana se traten y libren cosas y negocios de gobierno solamente. Fecha en Madrid a diez de henero de mill y quinientos y noventa y nueve»<sup>(68)</sup>.*

No obstante, Rodrigo Vázquez de Arce durará poco tiempo en la presidencia, victoria, cinco meses después fue sustituido por el conde de Miranda<sup>(69)</sup>. Solo el Reino sen-

tirá la derogación de las Ordenanzas del Consejo Real, así, a petición de uno de los procuradores de León, don Hernando de Quiñones, lo representó al rey el 26 de noviembre 1599

*«...La orden que el Rey nuestro Señor, que está en el cielo, poco antes de su fallecimiento, en que mandó que el Consejo se dividiese en quatro Salas, una que tratase las cosas de gobierno, otra de residencias y pleytos de Mil y Quinientas y otras dos de partes y otros pleytos, y que los de tenutas se vieses por los juezes de las tres salas, no embarazándose en ellos los de la Sala de Gobierno, pareció muy santa, justa y conveniente, porque tratándose en cada Sala siempre de unas mismas materias, estarán los juezes más prácticos y acertarán mejor en ellos y los pleyteantes y negociantes rescibieran grande alivio veneficio y escusarán mucho tiempo y gastos, sabiendo luego que llegaren a la Corte a que Sala y Jueces han de acudir para tratar de sus negocios, sin otras muchas comodidades que de ello resultarán. Y aunque dicha orden se empezó a poner en execución, zeso luego y bolbieron los negocios a tratarse como antes se solía hacer. Conbendría que VM. se sirbiese mandarla executar puntualmente y que en manera alguna no se exceda della»<sup>(70)</sup>.*

Pero el poder del tribunal era demasiado grande, como para que los procuradores lograsen imponer su criterio. A cambio el Felipe III, ante las quejas sobre el funcionamiento del Consejo, dio un decreto que más rememoraba las ordenanzas de comienzo del siglo anterior, que a la reforma ideada por su padre:

*«haviendo yo entendido los muchos negocios que a él ocurren, assí de gobierno como entre partes, y el estorvo que los unos hazen a los otros por no haver días señalados en que se traten y los daños que reciben las partes no pudiendo estar advertidos del día quel Consejo ha ver sus negocios o los que tocan a gobierno, perdiendo muchas vezes el tiempo y haziéndose costas los abogados y otros officiales que tienen (y aun impidiendo lo de gobierno por tratarse dellos en los más días) el tiempo que an menester para el despacho que yo desseo tengan los pleitos y negocios entre partes. Y por resultar otros inconvenientes, pareciéndome necesario prover en esto de remedio os mande lo tratádeses en ese Consejo. Y haviéndose tratado y consultádome lo que sobre ello pareció en él, avemos acordado y mandamos que por el tiempo que fuere Nuestra voluntad, el lunes de cada semana en las tres oras de la mañana se trate de las cosas de gobierno y que los demás días se vean y despachen los otros negocios y pleitos que se ofrecieren, de manera que todos los días de la semana, excepto el primero, queden enteramente para despachar las residencias, tenutas y pleitos de mil y quinientas y otros pleitos y negocios que huviere pendientes y se ofrecieren y acostumbren a despachar en el Consejo, con que por esto no se entienda que se ha de alterar ni mudar la orden que tiene en lo demás, ni en juntarse el biernes de cada semana el Consejo a ver los negocios que están remitidos a consulta, sino que se ha de continuar en la forma que hasta agora se a hecho. Por ende, yo os mando guardéis, cumpláis y essecutéis lo aquí contenido, sin embargo de qualesquiera otras órdenes o cédulas, estillo y costumbre que aya en contrario y con particular diligencia y cuydado atendáis a todo ello, para lo qual vos, el dicho Presidente, le ternéis de proverlo y ordenarlo assí. Fecha en Valladolid a diez y ocho de agosto de mil y seiscientos y tres años»<sup>(71)</sup>.*

Comenzaba la época dorada del Consejo. La reposición de las Ordenanzas de 1598



diez años más tarde, ya no supondría una amenaza ni para su autoridad ni tampoco para la preeminencia de su presidente, simplemente las regularon<sup>(72)</sup>. El punto culminante se alcanzaría con el Real Decreto de 1642, cuando el Felipe IV reconoció y *constitucionalizó* -permítase el anacronismo- el gobierno por consejo:

*«Mándoos con toda precisión que siempre me tratéis verdaderamente, aunque os parezca que sea contra mi gusto. Y aunque estoy cierto que si Dios no dexa de su mano, yo no le tendré en nada que sea contra lo que os digo, como hombre puede ser que yo yerre. Y para este caso es quando más he menester que mis ministros hablen claro y no me dexen errar. Y mirad que os pediré estrecha cuenta a todos si entiendo yo que declarado de esta forma mi voluntad vosotros no cumplís con ellas»<sup>(73)</sup>.*

## NOTAS

- <sup>(1)</sup> Escrito, sin fecha, de don Pedro de Córdoba. BL. Ad. 28353, f. 203r. Sobre la realización y resultado de la visita, Fray Prudencio de Sandoval, *Historia de la vida y hechos del Emperador Carlos V*, Madrid, 1956, III, pp. 433-434 (BAE, LXXXII).
- <sup>(2)</sup> Copiador de Cartas de Juan de la Vega, carta a don Antonio de la Vega, ca. 1553-1554. IVDJ, Env. 66, caja 88, tomo XI, f. 117v.
- <sup>(3)</sup> Carlos Javier de Carlos Morales, «Grupos de Poder en el Consejo de Hacienda de Castilla: 1551-1566», en *Instituciones y Élités de Poder en la Monarquía Hispánica durante el siglo XVI*, ed. José Martínez Millán, Madrid, 1992, pp. 113-114, donde encuadra la visita del Consejo de Hacienda de 1553 y las subsiguientes ordenanzas dentro de las luchas de partidos.
- <sup>(4)</sup> En ese sentido, creo que las disputas entre las armas y las letras a final del siglo XV, está en relación directa con el conflicto sobre la composición del Consejo. Julian Weiss, «*La Quistion entre dos cavalleros*: Un nuevo tratado político del siglo XV», *Revista de Literatura Medieval*, IV (1992), pp. 9-39 y VII (1995), pp. 187-207, texto que el autor sitúa en la década de los años ochenta del siglo XV.
- <sup>(5)</sup> La crítica de Diego Hurtado de Mendoza, como bien observa Ignacio J. Ezquerro Revilla, «El ascenso de los letrados eclesiásticos: el presidente del Consejo de Castilla Antonio Mauriño de Pazos», en *La corte de Felipe II*, ed. José Martínez Millán, Madrid, 1994, pp. 271-274.
- <sup>(6)</sup> «Algunos apuntamientos que tocan a la gobernación del reyno». En el membrete advierte que «di un traslado delos al príncipe nuestro señor en Valladolid a cinco de mayo de 1554 años», AGS, Estado, 103, f. 33. De él da ya cuenta Salustiano de Dios, «Introducción», en *Fuentes para el estudio del Consejo Real de Castilla*, Salamanca, 1986, pp. XXX-XXXII.
- <sup>(7)</sup> *Loc. cit.*
- <sup>(8)</sup> Las ordenanzas de 1554, están publicadas por Salustiano de Dios, *loc. cit.*, doc. XX, pp. 100-112. Sobre su carácter y las peticiones de las cortes, «Introducción», pp. XXXIV-XXXV. Carta del Presidente a Carlos V, 4.x.1554: «La visita que el Príncipe nuestro Señor hizo del Consejo, Alcaldes de Corte y otros oficiales, se acabó antes de su dichos partida. Y por lo que de della ha resultado, se han hecho tan buenas provisiones para ambos tribunales, que espero serán provechosas y que VM. se servirá con entero contentamiento.... Y pues con haverse hecho las diligencias posibles por todo el Reyno en las personas del Consejo, se ha hallado tanta limpieza y rectitud, con más esfuerço osaré importunar a VM. por el aumento de su salario, como otras vezes tengo suplicado...», AGS, Estado, 103, f. 309.
- <sup>(9)</sup> «Sentencia dada contra Pedro de Sotomayor...», dada y pronunciada en Palencia, 12.viii.1522: «...e dio consejo, favor e ayuda para que los del nuestro Consejo se prendiesen, como se prendieron: e tomaron nuestro sello e registro e los libros de nuestra contaduría: e hizo dos salas, la una llamada del Estado, e la otra del Consejo de la Justicia, donde proveía e mandaba, como proveía e mandaba, como proveen e mandan los del nuestro Consejo: e hijo e cometió otros muchos graves e inormes delitos...». CODOIN, XIII, pp. 455-465.
- <sup>(10)</sup> Publicadas por Salustiano de Dios, *Fuentes...*, doc. XXII, pp. 116-127. La minuta de la Real Cédula, en AZ, 134-218. El texto, con alguna pequeña variación, se volvió a promulgar por Felipe III, 30.i.1608, recogido en la NR, 2.4.62.
- <sup>(11)</sup> Las que en el futuro, a partir del comienzo del siglo XVII se conocieran como salas de Justicia y de Provincia.
- <sup>(12)</sup> NR, 2.4.55. Inmediatamente después de las Ordenanzas de 1554, las Cortes de Valladolid de 1555 pidieron la formación de tres salas; una para los pleitos de *Mill y Quinientas* y resi-

dencias -recordando las súplicas en el hechas por el Reino en anteriores ocasiones- otra para las de gobierno y una tercera para los negocios de justicia, Cuaderno de peticiones, XVI y CII, CLC, V, pp. 634-635 y 684 De nuevo se vuelve la creación de una Sala de *Mill y Qui-nientas* en las Cortes de Toledo, 1559, Cuaderno de peticiones, VI, CLC, V, p. 814. La petición fue aceptada, como se ve en el cuaderno de leyes y pragmáticas, LXVI, CCC, IV, pp. 465-466.

- <sup>(13)</sup> Lo que daba el ser a la Sala no son ni los consejeros ni el aparato de ministros inferiores y subalternos que los acompaña, que no tenían designada sala fija, sino el habitáculo donde se juntan. Esto será así hasta bien entrado el siglo XVIII.
- <sup>(14)</sup> De tiempo del cardenal Espinosa, el memorial anonimo dirigido a él, en BL, Add. 28352, f. 12r., sobre la actuación de los semaneros «en aviendo salas apartadas». Así se deduce también de una queja presentada al rey sobre los males del tribunal, según dice allí, «todo se remediaria con facilidad si SM. mandasse que se vean losnegocios y despachen por su anti-güedad. Y luego, en juntándose por la mañana, vean las cosas que son de todo el Consejo y, acabadas éstas, se aparten, como suelen, en salas sin perder tiempo en bolverse a juntar y a partar muchas veces en un día. Y así apartados, despachen en todas quatro salas los expedientes todos, que como no los aya represados, se tardarán muy poco los que día ocurren y luego se vean los pleitos...». Copia de un escrito, 12.vi.1588, sin firma. El escrito es del licenciado Boadilla, según el papel de despacho para Mateo Vázquez; en el se quejaba del funci-onamiento del Consejo y de su presidente, el conde de Barajas. AZ, 152-64 y 135-92, respec-tivamente. De la junta en pleno del Consejo a primera hora y posterior separación, otro testi-monio indirecto, «Advertencias que tocan al Consejo Real», RAH, SyC, N-2, ff. 129r-132r.
- <sup>(15)</sup> Papel para el despacho de Mateo Vázquez, resumen de lo alegado por el conde de Barajas, 12.vi.1588, en respuesta a las quejas del licenciado Boadilla, AZ, 135-92.
- <sup>(16)</sup> Los consejeros tenían claro que todos debían intervenir en su resolución, como lo manifiesta el presidente Pazos ante la propuesta de formar dos salas con los consejeros, una de gobier-no y otra de justicia. En su opinión, de hacerlo así, sería inevitable el «scisma que entre ellos entrara, de quén ha de ser de uno u otro tribunal», cit. por Ezquerria Revilla, «El ascenso de los letrados...», p. 291.
- <sup>(17)</sup> «Advertencias que tocan al Consejo Real», RAH, SyC, N-2, fo. 129r-132r. Según el escrito de queja del licenciado Boadilla, «los negocios que llaman expedientes, y se veen en pie, por su brevedad...», vid. nota 9.
- <sup>(18)</sup> Memorial al rey del licenciado Francisco Thomás, sobre la visita del licenciado Ameçaga, fis-cal de Granada, 24.vii.1588. AZ, 132-72, donde interpreta lo dispuesto en el capítulo 28 de las Ordenanzas de 1554, NR. 2.4.36.
- <sup>(19)</sup> Papel del despacho de la Junta de 1.ii.1592, nota sobre el papel de doña Beatriz Bermúdez de Castro: «Suplica lo que otras muchas vezes ha hecho de que se nombren juezes en el pleito que trata con don Joan Menchaca sobre la muerte de doña Lucrecia, su hija, y que el nom-bramiento dellos no se remita a los Consejos de Cámara y Justicia ni a los que presiden en ellos nia Rodrigo Vázquez, porque los tiene por sospechosos. Viose y ha parecido que se podría ordenar de parte de SM. al Consejo que se acaba de despachar este negocio, mirando la justicia dél, con la atención que es justo. Y quando se aya de tratar del nombramiento de juezes, avisen a SM. de los que se les ofreciere». «No creo que suele nombrar el Consejo juezes, sino el que preside. Y si el Consejo avisase los que se les ofreciese, y yo no tomase dellos resolución, podría ser que algunos le fuesen sospechosos. Y por esto creo que lo mejor preguntar al más antiguo en qué términos está este negocio en el Consejo y los que han sido juezes en él y lo pueden ser. Y visto lo que dirá se podrá responder mejor lo que convendrá

responder en esto en la Junta. Y si no se ofreciere inconbeniente en ello se haga assí». AZ, carp. 133, núm. 190.

- <sup>(20)</sup> José Maldonado y Pardo, *Tractatus de secunda supplicatione* [1689], Génova, 1762.
- <sup>(21)</sup> Cortes de Madrid, 1573, cuaderno de leyes y pragmáticas, LXVI, CCC, IV, pp. 465-466.
- <sup>(22)</sup> Copia del escrito del licenciado Boadilla, [12.vi.1588], AZ, 152-64 y 135-92, vid. supra.
- <sup>(23)</sup> Sobre la función de los semaneros y la indiferenciación del despacho, el memorial anónimo de tiempo del cardenal Espinosa, BL, Add. 28352, f. 12r.
- <sup>(24)</sup> Sobre el Consejo Real en el siglo XVI, Salustiano de Dios y Dios, *El Consejo Real de Castilla (1385-1522)*, Salamanca, s/f, resumen de su tesis doctoral, publicada posteriormente con el mismo título, Madrid, 1982; también en su «Introducción», pp. XXVI-XLV, loc. cit. Pedro Gan Giménez, *El Consejo Real de Carlos V*, Granada, 1988; también sus artículos, «Los Presidentes del Consejo de Castilla (1500-1560)» y «El Consejo Real de Castilla. Tablas cronológicas (1499-1558)», *Crónica Nova*, 1 (1968), pp. 9-31, y 4-5 (1969), pp. 9-159. Más oscuridad nos encontramos para el período de Felipe II, los trabajos de Ignacio Javier Ezquerro sobre dos de sus presidentes, «La distribución de la gracia durante la anexión de Portugal: Rodrigo Vázquez de Arce (1578-1583)», separata, pp. 267-285, y «El ascenso de los letrados...», prometen un trabajo esencial sobre el Consejo Real en esta época. En cuanto a la figura del cardenal Espinosa, básico en la historia del Consejo, y también para el nombramiento de consejeros y su relación con las luchas políticas, el estudio de José Martínez Millán, «Grupos de poder en la Corte durante el reinado de Felipe II: la facción ebolista, 1554-1573», en *Instituciones y elites...*, esp. pp. 183-197; también, «En busca de la ortodoxia: el Inquisidor General Diego de Espinosa», *La corte...*, pp. 189-228.
- <sup>(25)</sup> En cuanto a la capacidad para avocar, Real Cédula de 1.x.1519. La superioridad sobre otros consejos de la corte en causas de justicia, Carta orden del Consejo, 1.v.1531, AHN, lib. 1414, [f. 1v.] y f. xi v. respectivamente, la última, también en BNM, Mss. 904, f. 208r, y 1330, f. 212r-v.
- <sup>(26)</sup> Cartas escritas en 1525 a Carlos V, sin firma, AGS, Estado, leg. 15,II, f. 20. Richard L. Kagan, *Lawsuits and litigants in Castile, 1500-1700*, Chapel Hill, 1981, p. 124, (hay traducción española), piensa que son de Cobos.
- <sup>(27)</sup> Instrucciones secretas de Carlos V a Felipe II, 6.V.1543, publicada en el por M. Fernández Álvarez en el *Corpus documental de Carlos V* Salamanca, 1975, vol. II, doc. CCLII, pp. 105-118.
- <sup>(28)</sup> «Copia de la instrucción que el señor Rey don Phelipe el Segundo dio a Rodrigo Vázquez, Presidente de Castilla», BL, Add. 28456, ff 113r-120r.
- <sup>(29)</sup> «Instrucción que dio el señor Phelipe Segundo a don Diego Covarrubias, obispo de Segovia, quando le nombró por Presidente de Castilla el año de 1572», copia en la RAH, Col. Semperre y Guarinos, tomo XV, f. 352v y 354v, también en BNM, Ms. 11261, f. 2v.
- <sup>(30)</sup> «Advertimientos de mucha considerazion que el Señor Rey Don Phelippe II embió al Presidente del Consexo Pazos, obispo de Avila, luego que le proveyó en la Presidencia», Aranjuez, 9.V.1575, BL, Egerton, 2086, f° 1r-3v.
- <sup>(31)</sup> Borrador de crt. de Felipe II al marqués de Ayamonte, 29.viii.1574: «...Lo que yo os advertí de lo que podríades escribir a mis manos, no fue por más de lo que en aquella carta dixé para que no se confundiesen los negocios que seoviesen de ver en los consejos y se os pudiese mejor responder, reservando escribir a ellos solamente lo particular que uieses de servir para mi advertimiento y vos viésedes convenir que no se supiesse por otro. Y assí fue bien scrivirme en particular lo de la reformation de las cosas de justicia, y lo mismo haréis de lo que

a este propósito se ofreciere y os pareciere...», BL, Add. 28357, vol. 1, ff. 45r-47. Ezquerria, «El ascenso de los letrados...», p. 291, que da cuenta de la existencia de un proyecto para dividir el consejo en salas en tiempo de la presidencia de Pazos y la contrapuesta de éste para que se creara una nueva chancillería en Madrid.

<sup>(32)</sup> BL, Add. 28352; crt. de Pedro de Córdova, cit. supra.; crt. del secretario Ayala a Mateo Vázquez, ca. 1577, IVDJ, Env. 16, f. 68.

<sup>(33)</sup> El título del conde de Barajas tiene fecha de 25.x.1582, con la diligencia de la entrada del conde en el Consejo el 30 de octubre, AHN, Consejos, lib. 1435.

<sup>(34)</sup> José Antonio Escudero, «El Consejo de Cámara de Castilla y la Reforma de 1588», *AHDE*, LXVII (1997), pp. 925-941.

<sup>(35)</sup> Consulta del Consejo Real, 5.v.1588, BL, Add. 28348, ff. 9-10. Sobre la reforma de la Cámara, José Martínez Millán, «La lucha por la administración de la gracia en el reinado de Felipe II. La reforma de la Cámara de Castilla, 1580-1593», *Annali di Storia Moderna e Contemporanea*, 4 (1998) 31-73.

<sup>(36)</sup> Nota de despacho, Felipe II escribe junto a ello: «en lo de la reformation, con el papel donde está el del Consejo digo lo que me parece, que es lo mismo com que aquí que se dice», BL, Add. 28348, f. 26r.

<sup>(37)</sup> Si se quiere profundizar en la naturaleza jurídico-política del Consejo Real, el camino adecuado ha de ser la exploración de su autoridad, más que el análisis del carácter de su jurisdicción. Bartolomé Clavero, «Sevilla, Concejo y Audiencia: Invitación a sus *Ordenanzas de Justicia*», en *Ordenanzas de la Real Audiencia de Sevilla*, facsímil, Sevilla, 1995, pp. 22-23, marca la complejidad de la relación entre el rey y su consejo. Sin mencionar el problema de la autoridad y para la centuria siguiente, el momento de mayor esplendor del Consejo, Beatriz Cárcelos de Egea, «Voluntas e iuridictio: obediencia, ejecución y cumplimiento de la voluntad real en la Corona de Castilla en el siglo XVII» en *Monarquía, Imperio y pueblos en la España moderna*, Pablo Fernández Albadalejo, Alicante, 1997, pp. 663-677. Dos cuestiones hay que recordar, las raíces romanas de la noción de autoridad y su íntima relación con la legitimidad.

<sup>(38)</sup> El documento está roto.

<sup>(39)</sup> Copia de un papel sin firma, intitulado «El negocio sobre el condado de Puñonrostro está en término que SM. deve mucho mirar lo que provee, y para acertar en esto, es menester primero confrontar el echo el qual refiere aquí, según le teonto entendido», San Lorenzo, 2.ix.1586, AZ, 132-75.

<sup>(40)</sup> Copia de un escrito de 12.v.1588, sin firma, del licenciado Boadilla; resumido en el papel de despacho para Mateo Vázquez, donde se resume éste y las quejas de otros por el funcionamiento del Consejo, AZ, 152-64 y 135-92, respectivamente.

<sup>(41)</sup> AHS, 135-92. nota de despacho para Mateo Vázquez, 12.vi y 11.viii.1588.

<sup>(42)</sup> Consulta del Consejo Real, 199.v.1588, AHS, 132-67.

<sup>(43)</sup> Así papel de Mateo Vázquez al rey, 7.viii.1588, «es menester aya en el Consejo grandes personas, pero no les veo hazer grandes cosa, sino que en medio de los clamores de exequirse las leyes, salen con hablar en la de las cortesías que anda entre las manos...». La misma impresión el de 8.v.1589, donde escribe al rey que la provisión de las plazas del Consejo «con el secreto que conviene y VM. quiere, porque no se sepa y resulte dello nota en el Presidente y los de la Cámara, que desmayarán y afloxarán mucho con saberse y se desautorizarán con la gente...». BL, Add. 28263, ff. 461-462 y 503-504, respectivamente. Papel de 20.vii.1589, donde responde a la petición para que dé su parecer sobre las personas del Consejo, ibidem, Add. 28349, ff. 147.

- <sup>(44)</sup> Papel de 6.iv.1591 a Felipe II, quien apunta: «Todo esto es para mirar mucho en ello y así yré pensando en ello, aunque ay agora tantas otras cosas en que pensar, que no sé como queda juicio en la cabeça...», BL. Ad. 28.263, f. 560r.
- <sup>(45)</sup> Papel de Felipe II, 22.iv.1592, donde da noticia de su decisión de nombrarle, AHN, Consejos, leg. 51447, f. 157.
- <sup>(46)</sup> «Copia de la instrucción que el señor Rey don Phelipe el Segundo dio a Rodrigo Vázquez, Presidente de Castilla», BL, Add. 28456, ff 113r-120r.
- <sup>(47)</sup> Apuntamiento, sin firma, letra de don Rodrigo, RAH, SyC, N-2, ff. 116r-117r. Este papel debió servir para formar la Consulta de Vázquez de Arce a Felipe II, 26.xi.1597; en ésta, de forma más resumida y sin hacer constar las condiciones ni especificar las razones, se relata lo que ocurrió con Chaves y Monra, cuando fue nombrado presidente: «El mes que viene de abril, hará 6 años... represente algunas razones por donde no convenía al servicio del VM. ni aun podría acetar el oficio sin bolverle al estado que tenía antes de la nueva orden que VM. dio en tiempos del conde de Barajas. Y aviendo pasado algunas pláticas, desistí desto postrero. Y f. Diego de Chaves apuntó allí, y salido don Xpoval., ynsistió mucho conmigo que no parase en lo demás, pues VM. no lo ordenava para luego, ni lo havía de hacer adelante, sirviendo yo en la manera que esperaba. Creyle, como su persona, oficio y xpiandad...», ibidem, ff. 107r-108.
- <sup>(48)</sup> Papel de Felipe a Vázquez, 22.iv.1592, «Como havréis ya entendido he mandado a X. por Presidente del Consejo Real y así se le hará el título o cédula para que yo la firme mañana», AHN, Consejos, leg. 51447, l.
- <sup>(49)</sup> Consulta de Rodrigo Vázquez de Arce al rey, 9.xi.1593, donde pide licencia para retirarse. Según «Instrucción del rey Felipe II al Presidente Rodrigo Vázquez de Arce sobre la formación de salas en el Consejo de Castilla», El Pardo, 15.xi.1597, lo intentó en tres ocasiones, en los años 1592, el 93 y el 94, RAH, RyS, N-2, ff. 174-175r, la minuta en AZ, 131-214. La primera publicada por de Dios, loc. cit., doc. XXI, pp. 113-115. Consulta del Reino, 17.ii.1594, copia del siglo XVIII, «...mande dar la orden que más pareciere convenir para que en esta Corte corra el despacho de los negocios con brevedad, que con lo uno y con lo otro, así pretendientes como pleiteantesseran muchos menos de los que ahora son y cesarán los daños...», AHN, Consejos, leg. 51447, f. 443.
- <sup>(50)</sup> El deterioro de la salud de monarca debió provocar cierta inquietud, de cara al inmediato futuro, por la situación en la que se encontraban los Consejos y, en especial el de Castilla. Así lo expresa unas anónimas «Advertencias que tocan al Consejo Real»: «Pero como después de los largos y felices días de SM., ha de faltar su providencia y gobierno, el único medio, después de Dios Nuestro Señor, es dejar establecidos de personas de autoridad los Consejos y particularmente el de Estado y el Real y particularmente el de Inquisición, porque son los quicios con que se rige y gobierna todo lo demás y son las puertas por donde ha de entrar la paz y la justicia de todos los Reynos de SM.», RAH, SyC, N-2, ff. 129r-132r.
- <sup>(51)</sup> «El secretario Matheo Vázquez me scribió que VM. mandaba que con el secreto y recato que semejante negocio manda, propusiese a VM. las personas que me paresciesen más a propósito para las plazas del Consejo, para la Cámara y para otras cosas de mucha importancia y que desto avisase a VM. con toda brevedad...». Representación de Hernando de la Vega a Felipe II, 6.vii.1591, IVDJ, Env. 16, f. 23.
- <sup>(52)</sup> Sobre el particular y el período, las llamadas de atención que hace José Martínez Millán, «Introducción: la investigación sobre las élites del poder», en *Instituciones y Élite...*, pp. 11-24 y Ezquerro, «El ascenso de los letrados...», pp. 271-274.

- <sup>(53)</sup> Papel intitulado «Las principale advertencias que parece (que siendo SM. servido) se deven hacer al que agora es presidente del Consejo y a los que fueren adelante, para el buen govier- no y administración de la justicia, mandándoles que inviolblemente las guarden, son las siguientes», AZ, 134-215. Todas las cursivas que aparecen en los textos recogidos, son mías.
- <sup>(54)</sup> Instrucción del Felipe II a Rodrigo Vázquez de Arce, El Pardo, 15.xi.1597, RAH, SyC, N-2, ff. 174r-175r, editada por De Dios, *loc. cit.*, doc. XXI, pp. 113-115. Una minuta en AZ, 134-214.
- <sup>(55)</sup> Las dos de ellas estan fechadas el 26.xi.1597, una escrita por por el escribano, con correc- ciones y fecha ológrafas, pero sin rubricar; la otra enteramente ológrafa y rubricada; un ter- cer documento ológrafo y sin rúbrica, que es un simple apuntamiento donde se dan las noti- cias más sustanciosas y que hemos comentado ya. Entre ellas un papel con la respuesta de Felipe II, RAH, SyC, N-2, ff. 107r-108r, 103r-104r, 116r-117r y 105r, respectivamente.
- <sup>(56)</sup> Esta referencia a la instrucción que debían recibir los que entraran en la sala de gobierno, que se mantendrá en el texto definitivo de las Ordenanzas, recogía la sugerencia de Hernando de la Vega, como hemos visto más arriba. Es la única referencia, completamente indirecta, que hace la instrucción la experiencia.
- <sup>(57)</sup> Real Cédula sin fecha ni rúbrica, pie del último folio «VM. es servido declarar el orden que ha de guardar el Consejo en el despacho de los negocios de gobierno y justicia y que haya 14 letrados para residencias y comisiones zibiles y criminales. La qual dicha orden comiense desde el año de 1598» y, a continuación, rúbrica. AZ, 134-212.
- <sup>(58)</sup> Subrayado en el original.
- <sup>(59)</sup> «Advertencias que tocan al Consejo Real», RAH, SyC, N-2, ff. 129r-132r, es un apunte de la misma letra que la primera consulta que Arce redactó el 26.xi.1597 para responder al rey.
- <sup>(60)</sup> Minuta de Real Cédula, AZ, 134-16, con folio a parte donde se recogen los dos capitulos sobre las salas de Mil y Quinientas y las otras dos de justicia.
- <sup>(61)</sup> «La junta de 12 de enero de 1598», AZ, 134-211. Al margen: «Haviendo visto todo esto, mandó SM. estender esta minuta, la qual manda se vea en la junta para que lo tengan enten- dido y por si algo se le ofreciere».
- <sup>(62)</sup> AZ, 134-216.
- <sup>(63)</sup> Real Cédula, 3.ii.1597. Diligencia de publicación el día 21 y nota de la representación del Consejo el día 23, firmadas por Juan Gallo de Andrada. Sobrecarta. AHN, Consejos, leg. 7126.
- <sup>(64)</sup> «...Conforme a ella he de nombrar luego para este año de 1598 y después en principio de cada año cinco del dicho consejo, demás de vos el dicho presidente para lo del gobierno y otros cinco para la sala en que se an de ver y determinar los pleito sde Mil y Quinientas y residen- cias y para para cada una de las otras dos salas que ha de haver, donde se an de despachar expedientes y otros negocios que acuden a esse Consejo». Nombraba para el gobierno al licenciado Guardiola, Núñez de Bohorquez, Tejada, don Juan de Acuña y Juan Sarmiento y Valladares; para la de mil y quinientas, al doctor don Alonso de Ágreda, licenciados Juan de Morilla, Pedro Díaz de Tudanca, don Diego de Ayala y el doctor don Alonso de Ayala; y para las otras dos, que conitunuan sin una denominación específica, don Luis de Mercado, Fran- cisco de Alborno, y don Diego Fernando de Alarcón y Juan de Oballe de Villena, Diego Gasca de Salazar y el doctor Calderón Minuta del RC, 17.ii.1598, AZ, 134-218; también en BNM, Ms. 18729/17, f. 396v. De Dios, «Introducción...», p. XLI.
- <sup>(65)</sup> Son las notas de despacho de las Juntas de 24.iv y 10.vii.1598, donde se refieren cosas que, conforme a la ordenanza pertenecían a la Sala de Gobierno. Sin embargo, en una tercera, la

que corresponde a la de 7.viii.1598, es el Consejo Real quien consulta sobre una cuestión de prelación en un pleito remitido en discordia en el que tenían que entrar... AZ, 134-219, 220 y 221.

- <sup>(66)</sup> «Lo que parece que conviene proveerse para el cumplimiento y execución de lo proveydop por SM. en la nueva orden dada para la expedición de los negocios tocantes al Consejo, es lo siguiente». AZ, 134-213.
- <sup>(67)</sup> «Discurso para el Rey nuestro Señor con las calidades que pertenecen a los ministros de sus consejos y lo que en cada uno de ello se deve executar para la segura conservación de la Religión Xptiana y gobierno temporal. Dado al señor Phelipe tercero el año de 1598 a los principios de su reynado. Este papel hace conocer el estado en que se hallava España quando murió Phelipe 2.º quando murió a 13 de septiembre del mismo año». BNM. Ms. 18191, f. 125v. Una nota de P. de G., Pascual Gayangos?, dice «no pudo darse en 1598, como aquí se dice, lo más pronto sería en 1599». Otra copia en el Ms. 2348, f. 25v-26r.
- <sup>(68)</sup> «...Yo el Rey. Por mandado del Rey nuestro Señor. Antonio Navarra de la Rategui. VM. es servido zese el orden que se dio en 14 de febrero de 1598 para el despacho de los negocios del Consejo y se guarde la que se tubo antes della por lo pasado, conforme a las Leyes, zédulas y ordenanzas, y que los viernes de cada semana se traten y libren cosas y negocios de gobierno solamente». AHN, Consejos, leg. 7126.
- <sup>(69)</sup> Cartas del conde de Portoalegre, don Juan de Silva, a Rodrigo Vázquez y al conde de Miranda, de junio y mayo, respectivamente de 1599, BNM, Ms. 981, f. 90r-v y 166v. Luis Cabrera de Córdoba, *Relaciones de las cosas sucedidas en al Corte de España desde 1599 hasta 1614*, Salamanca, 1997, p. 23, sobre el posterior destierro de Vázquez de Arce, p. 26.
- <sup>(70)</sup> Consulta del Reino, 26.xi.1599, la propuesta fue hecha el día 12, según dice en la sobrecarta, que añade que «en 27 de hebrero de 1601 acordó el Reino se pidiese por capítulo de Cortes lo que contiene la consulta». Es una copia de letra del siglo XVIII. AHN, Consejos, leg. 51447. Está recogida en Cortes de Madrid, 1598-1601, CCC, XVIII, p. 422.
- <sup>(71)</sup> RC. 8.viii.1603, «Por mandao del Rey nuestro Señor, Juan de Amezqueta», Pie: «VM. para el mejor y más breve despacho de los negocios que ocurren al Consejo, manda que de aquí adelante, por el tiempo que fuere su Real voluntad, el lunes de cada semana, en las tres oras de la mañana, se trate de las cosas del gobierno y que los demás días se lleven y despachen los otros negocios y pleitos que huviere pendientes y se ofrecieren y acostumbren despachar, guardándose la orden que tiene en lo demás y en juntándose el Consejo los biernes de cada semana a verlos negocios que están remitidos a consulta». Diligencia de publicación en el Consejo: «En la ciudad de Valladolid a nueve días del mes de septienbre de mill y seiscientos y tres años, yo don Juan Gallo de Andradras, escrivano de Cámara de SM., estando juntos los señores del Consejo, ley la cédula de SM. desta otra parte escripta y los Señores obedecieron en el acatamiento devido y dijeron que cumplirían lo que SM. por ella les manda de lo qual doy ffee. Juan Gallo de Andrada». AHN, Consejos, leg. 7126.
- <sup>(72)</sup> RD. 30.i.1608, original en AHN, Consejos, leg. 7126, es el mismo texto de la de 1598, pero varía en número de letrados para las comisiones, recogida en NR, 2.4.62. La noticia de la reposición, en Cabrera de Córdoba, *Relaciones...*, pp. 331-332. También en este caso tras la imposición de la Ordenanza parece esconderse ciertas tensiones con la figura del presidente, ahora el conde de Miranda.
- <sup>(73)</sup> AHN, Consejos, leg. 12019. En los AA, 2.4.70, se recoge un texto aún más contundente, el Real Decreto del mes de junio del mismo año, dirigido al Consejo de Indias; no es gratuito que el Consejo Real recogiera el texto de éste último y no el que iba dirigido a él. Por desgracia, la enorme importancia de esta disposición no ha sido apreciada por la historiografía.



pese a que la coincidencia en el tiempo con las medidas tomadas por Luis XIV contra el Parlamento de Paris, el *Édit* de 21.ii.1641, dé pistas más que suficientes para apreciar su significación.